
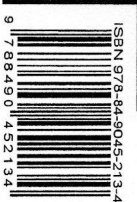


Editorial Comares

MARCIAL PONS LIBRERO Tfno.: 913194250
Derecho/Economía
Proveedor: 111288 Fecha: 15.06.2017
PEDIDO:
Material:  100963623
EL PROCESO CIVIL INGLÉS
EUROS: 23.00 IVA INCLUIDO
DERECHO REPOSICION



El proceso civil inglés
MERCEDES DE PRADA RODRÍGUEZ / ROBERTO MUÑOZ ROJO

Colección Estudios de Derecho Procesal Penal
Dirigida por Antonio del Moral García

31

El proceso civil inglés

Mercedes de Prada Rodríguez
Roberto Muñoz Rojo

Prólogo de Julio Banacloche Palao

Editorial Comares

31

CAPÍTULO I

FUENTES DEL DERECHO PROCESAL Y EL OVERRIDING OBJECTIVE

1. LAS FUENTES DEL DERECHO PROCESAL

1.1. Introducción

I. Las principales fuentes reguladoras del derecho procesal inglés son: la ley, la doctrina del precedente («*case law*»), las directrices prácticas («*practise directions*»), las guías de los tribunales y la competencia inherente («*inherent jurisdiction*»). Todas ellas, utilizadas en conjunto, dan lugar a una serie de normas o reglas que, incluíblemente, resultarán de aplicación durante las diversas fases que conforman el proceso civil. Entre las fuentes citadas, destacan por su importancia, la legislación, específicamente las leyes dictadas por el Parlamento («*statutes*» o «*Acts of Parliament*») y el precedente judicial, aunque, como se pondrá de manifiesto a lo largo de nuestro estudio, todas ellas tienen un peso específico dentro del cauce procedimental civil inglés.

1.2. La ley como fuente principal

I. La ley es considerada como la fuente más relevante del ordenamiento jurídico y el aspecto distintivo que la caracteriza frente a otras fuentes, como la costumbre, reside en su origen. En términos generales, la ley surge formalmente en el Parlamento y, por ello, debe ser recogida por escrito con el propósito de ser publicada y conocida por todos aquellos que deben aplicarla y respetarla. Así, la principal fuente reguladora del procedimiento civil, en los órganos del *High Court* y en la *Court of Appeal*, es la *Senior Court Act 1981* (SCA 1981). La SCA 1981 solía conocerse como la Ley del Tribunal Supremo 1981 (Supreme Court Act 1981), pero su denominación fue modificada cuando el *Supreme Court* reemplazó a la *House of Lords* en octubre de 2009. En el caso del *County Court*, la fuente principal y equivalente es la *County Courts Act 1984*. Ambas leyes se aplican tan solo de forma genérica, de manera que las particularidades de muchos de los procedimientos, se fijan por las normas que determine el propio tribunal.

II. A tenor de la *Civil Procedure Act 1997*, s. 2, el Comité de Normas Procesales Civiles («*Civil Procedure Rule Committee*») está facultado para crear normas reguladoras de la práctica del proceso vinculantes para los tribunales civiles. Esta atribución tiene por objeto crear normas que garanticen un sistema judicial civil accesible, justo y eficiente.

La principal regulación normativa, creada por el *Civil Procedure Rule Committee*, son las Reglas del Procedimiento Civil de 1998 o *Civil Procedure Rules 1998* (CPR), reguladoras del proceso civil en Inglaterra y Gales (en vigor desde el 26 de abril de 1999). En definitiva, estas reglas regulan las actuaciones ante el *County Court*, el *High Court* y la Sala de lo Civil de la *Court of Appeal*¹.

El CPR se divide en Partes («Parts») y su contenido se recoge en sus Reglas («Rules»). De este modo, a cada Parte le corresponde una *Practice Direction* (PD) o Directriz Práctica, que desarrolla pormenorizadamente el contenido de cada Parte correspondiente. Asimismo, dentro del CPR se encuentran los «*pre-action protocols*», códigos de conducta preparados individualmente para cada tipo de procedimiento cuyo objetivo es regular la relación de las partes y el comportamiento que éstas deberían tener antes de comenzar el procedimiento².

Esta normativa supuso la exitosa entrada en vigor de las propuestas de reforma del sistema judicial civil fijadas en el *Final Report* y recabadas por Lord Woolf³, *Master of the Rolls*, en aquel momento⁴. Por tanto, la promulgación del CPR se erige como una de las mayores reformas del sistema procesal civil inglés, al modificar sustancialmente la normativa y regulación vigente hasta entonces⁵.

La reforma de Lord Woolf nace a raíz de las críticas al sistema judicial sobre su ineficiencia e ineffectividad, principalmente, en relación a los costes, los retrasos y la complejidad e incertidumbre del procedimiento. De esta suerte, los principales objetivos de la ambiciosa reforma fueron: mejorar el acceso a la justicia (en aplicación del novedoso «*overriding objectives*»), reducir los costes y plazos del procedimiento, simplificar las reglas procesales y modernizar la terminología legal⁶. Los cambios introducidos por el CPR, en palabras del propio Lord Woolf, supusieron una «*connoción cultural*» para muchas de las personas involucradas en el sistema judicial inglés⁷.

Varias editoriales han publicado notas aclaratorias del CPR y la jurisprudencia que lo desarrolla. Estos manuales facilitan la mejor comprensión y, a la sazón, aplicación de estas

¹ El CPR está disponible electrónicamente en: www.justice.gov.uk/civil/procrules.

² Igualmente, como apunta SIR ANTHONY CLARKE en «The Future of Mediation», *Arbitration - the international journal, mediation and dispute management*, Volumen 74, Núm. 4, pág. 419, otra de las finalidades de los *pre-action protocols* es promover el acuerdo entre las partes, con anterioridad al inicio del litigio.

³ En opinión de REMCO VAN RHEE, C.H., en «Tradiciones europeas en el procedimiento civil», *Revista de Estudios de la Justicia*, Núm. 15, 2011, la creación del CPR de 1998 ha supuesto un avance del sistema procesal civil inglés hacia los modelos continentales. En este sentido, no faltan aquellos que opinan que el legislador inglés se basó en los sistemas europeos para la creación del CPR. *Vid.*, TARUFFO, MICHELLE. «El proceso civil de "civil law": Aspectos fundamentales». *Revista Ius et Praxis*, 12 (1): 69 - 94, 2006.

⁴ El sistema judicial inglés se encuentra jerarquizado. De esta forma, el *Master of the Rolls* es el segundo escalafón, sólo por debajo del *Lord Chief of Justice* (puesto que ocupó con posterioridad Lord Woolf). El *Master of the Rolls* es, a su vez, el presidente de la Sala de lo Civil de la *Court of Appeal*.

⁵ En opinión de VEEGER, V. «Evidential Rules in International Commercial Arbitration: From Tower of London to the New 1999 IBA Rules», 65 *Arbitration*, noviembre 1999, pág. 294, los cambios introducidos por Lord Woolf suponen una «sonada revolución del sistema procesal inglés». Por el contrario, aun cuando se trata de una minoría, hay autores que se muestran críticos con la citada reforma: ZANDER, M. «The Wolff Reforms: What's the verdict?», pág. 417, en DWYER, D., «The Civil Procedure Rules. Ten Years On», Oxford, 2009.

⁶ Por ejemplo, se eliminaron expresiones en latín y se modificaron ciertas acepciones, con el afán de hacer los términos jurídicos más accesibles. A modo de ejemplo, el demandante pasó a llamarse «*claimant*» (en lugar de «*plaintiff*») y el escrito de demanda «*claim form*» (en lugar de «*writ*»).

⁷ LORD WOOLF, «Mediation in Arbitration in the Pursuit of Justice», en *ADR, Arbitration, and Mediation. A Collection of Essays*, Authorhouse, 2014, pág. 516.

Reglas. Las publicaciones se utilizan no sólo por las partes y sus representantes legales, sino que en ocasiones también son citadas en resoluciones judiciales. De entre todas, cabe destacar el denominado *White Book*, que se publica con carácter anual.

III. Dentro del marco legal descrito, cabe añadir el cambio que supuso la entrada en vigor de la *Human Rights Act 1998*, al incorporar las disposiciones del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Del mismo modo, desde que el Reino Unido entró a formar parte de la Comunidad Económica Europea (CEE), las instituciones europeas tienen poder legislativo. Así, el Reino Unido está sujeto no sólo a las leyes promulgadas por el Parlamento sino, también, por aquellas derivadas de los tratados europeos y la legislación generada por las instituciones europeas, que resulta de aplicación.

IV. No obstante, si bien es cierto que el poder legislativo lo ostenta el Parlamento y las instituciones europeas, son los tribunales quienes deben **interpretar** la normativa. Para ayudarles en esta función, *The Interpretation Act 1978* y el glosario anexo al CPR, proporcionan definiciones de algunos de los conceptos legales utilizados más frecuentemente en las leyes y en el CPR, de forma que su aplicación resulte homogénea. Asimismo, desde 1999 las leyes incluyen notas explicativas, para intentar aclarar la intención del legislador en el momento de la redacción de la normativa.

Los jueces pueden aplicar diversos criterios interpretativos:

- *Literal rule*: consistente en la interpretación literal de los textos legales, por la que, en palabras de Lord Esher, en *R. c. The judges of the City of London Court*, «si las palabras de una ley son claras, se deben seguir, incluso cuando ello lleve al absurdo»⁸.
- *The golden rule*: como el anterior criterio puede resultar muy restrictivo, cuando el resultado de la interpretación literal lleve al absurdo (que, en ningún caso, pudo pretender el legislador) el tribunal podrá llegar a un resultado diferente, atendiendo a la norma en su conjunto.
- *Mischief rule*: del mismo modo, los jueces podrán interpretar una norma más allá de la dicción literal, atendiendo al problema que, en efecto, la norma en particular trata de remediar.
- *Purposive approach*: lo importante es el espíritu de la norma, de forma que su literalidad quede supeditada al cumplimiento de su propósito. En palabras de Lord Griffiths en *Pepper c. Hart*: «Ha pasado mucho tiempo desde que los tribunales adoptaban un criterio estricto de interpretación que requería la adopción del significado literal del lenguaje. Los tribunales ahora adoptan el *purposive approach*, que trata de dar efecto al verdadero espíritu de la ley y que está preparado para tener en consideración muchas más circunstancias externas en relación con los antecedentes sobre los que se promulgó la legislación»⁹.

1.3. La doctrina del precedente: *case law*

I. El *case law* es una de las notas más características del sistema de fuentes anglosajón. Sus antecedentes históricos se remontan a Guillermo I de Inglaterra, más conocido como Guillermo el Conquistador, precursor de la estandarización del sistema legal inglés. Su intención

⁸ *R. c. The judges of the City of London Court* [1892] 1 QB 273.

⁹ *Pepper c. Hart* [1993] 1 All ER 42.

era tratar de eliminar la, hasta entonces, aplicación heterogénea de diversos sistemas legales existentes con base en las diferentes costumbres y tradiciones¹⁰, enviando a representantes a que controlaran las administraciones locales para resolver las disputas que en ellas pudieran surgir. Con el afán de unificar el sistema legal, se llevó a cabo una profunda selección de las costumbres aplicadas hasta ese momento y las que se mantuvieron resultaban de aplicación a todo el territorio. Este proceso tuvo como resultado lo que, en la actualidad, se conoce como *common law*, es decir, un sistema jurídico que gobierne a todos por igual.

II. Dada la relevancia de los precedentes judiciales es de suma importancia que estén accesibles tanto a los profesionales jurídicos como a los ciudadanos, para poder basarse en éstos, cuantas veces sea necesario. De esta forma, desde 1985, a iniciativa del *Incorporated Council of Law Reporting* (ICLR), se comenzaron a registrar las decisiones judiciales en recopilaciones jurídicas o «*Law Reports*». Debemos advertir que, aun cuando se registran todas las decisiones del Tribunal Supremo y la gran mayoría del Tribunal de Apelación, solo se recoge una pequeña fracción de todas las resoluciones que se dictan en el resto de tribunales.

Hay distintos *Law Reports* y algunos de los más conocidos son: *The Official Law Reports: Appeal Cases* (AC), *Queen's Bench* (QB), *Family* (Fam) y *Chancery* (Ch) y el *Weekly Law Reports*, ambos publicados por ICLR, o el *All England Law Reports* (All ER), publicado Butterworths/Lexis desde 1936. También podemos encontrar otras recopilaciones especializadas en un área del Derecho en particular. En cualquier caso, cuando se cita una resolución judicial se debe hacer referencia al *Law Report* dónde está registrada.

III. Así pues, la doctrina del precedente consiste en aquellas **reglas y principios** fijados por los jueces y tribunales en las respectivas decisiones judiciales¹¹, cuya aplicación resulta homogénea en todo el territorio y a cuantas disputas pudieran surgir.

En este sentido, en el sistema legal inglés, el juez tiene atribuida una función de creación del Derecho, que da origen a la doctrina del precedente¹². Según esta doctrina, los tribunales están obligados a respetar las decisiones judiciales dictadas en casos anteriores, tanto por el por el propio tribunal como por los tribunales jerárquicamente superiores.

La justificación del *case law* reside en que «es práctica habitual de la mente humana, jurídica o no, aceptar la misma pauta de casos similares o análogos»¹³. De hecho, se considera como un principio básico de la administración de justicia que los casos semejantes se resuelvan de forma similar¹⁴.

IV. Las decisiones judiciales constan de hechos y de fundamentos de derecho, sobre los que el tribunal basa su decisión. Este razonamiento jurídico se denomina *ratio decidendi*, que es la parte del fallo judicial que origina el precedente. Ello excluye los votos particulares y

¹⁰ Debemos aclarar que, en todo caso, la costumbre nunca se consideró como ley, sino los fallos judiciales que reconocían dichas costumbres.

¹¹ Los casos se nombran dependiendo de las partes. En primer lugar, se cita al demandante y posteriormente al demandado. Así, si por ejemplo, si Mr Brown decide iniciar una acción judicial frente a Ms Griffiths, el caso se denominará *Brown v Griffiths*.

¹² Como apunta GILLESPIE, A., A. en *The English Legal System*, Oxford University Press, 2007, si bien, ésta es una de las principales notas características del sistema jurídico inglés, en la actualidad, han surgido dudas sobre el papel de creación del derecho de los jueces, en tanto en cuanto que haya podido ser sustraído por la función legislativa del Parlamento.

¹³ BLOM-COOPER, L. & DREWRY, G., *Final Appeal*, Oxford Clarendon Press, 1972, pág. 65.

¹⁴ CROSS, R. & HARRIS, J.W., *Precedent in English Law*, Oxford University Press, 1991, pág. 3.

los pronunciamientos *obiter dicta*, que no serán vinculantes, aun cuando no dejan de tener un cierto grado de influencia, por lo que se podrían utilizar para persuadir al tribunal. En efecto, conforme a lo dispuesto en *Behrens c. Bertram*: «Está establecido que si un juez fundamenta su decisión en dos argumentos, ambos son vinculantes. No es posible escoger uno por encima de otro, al entender que supuestamente se trata de un mejor argumento, ignorando el otro; ni tampoco importa en este sentido el orden de los mismos»¹⁵.

En definitiva, los precedentes judiciales adquieren naturaleza coercitiva (*stare decisis*), de forma que los tribunales están vinculados por los fallos judiciales dictados con anterioridad por ellos mismos y por los tribunales jerárquicamente superiores; especialmente, por el Tribunal Supremo cuyas decisiones son vinculantes al resto de tribunales. Por ello, en la presente obra, en ocasiones, nos referiremos a decisiones judiciales que resulten de especial importancia.

V. Como resultado de la doctrina del precedente, el *High Court* está vinculado, en términos generales, por las decisiones judiciales que hubiere dictado el mismo, además de por el *Court of Appeal* y el *Supreme Court* (o anterior *House of Lords*). Del mismo modo, el *Court of Appeal* debe respetar las decisiones del *Supreme Court* (o anterior *House of Lords*), amén de aquellas dictadas con anterioridad por el mismo¹⁶. No obstante, como quedó reflejado en *Young c. Bristol*¹⁷, el *Court of Appeal* puede apartarse de la doctrina del precedente siempre y cuando:

- Hay a dos decisiones del *Court of Appeal* contradictorias, en cuyo caso, el tribunal deberá decidir cuál seguir.
- El precedente se haya anulado, expresa o implícitamente, por el Tribunal Supremo, debiendo seguir el *Court of Appeal* lo dictado por el Alto Tribunal.
- El precedente se haya dictado *per incuriam*, esto es, omitiendo o ignorando otro precedente o una norma que resultase de aplicación.

El Tribunal Supremo, en un primer momento, a raíz de la decisión *London Tramways*, estaba igualmente obligado a respetar los criterios aplicados en sus decisiones anteriores¹⁸. Sin embargo, el 26 de julio de 1966, la (por aquel entonces) *House of Lords* dictó la conocida *Practice Statement 1966*, en virtud de la cual, aunque en términos generales las sentencias anteriores del Alto Tribunal le son vinculantes, podrá apartarse de los precedentes cuando lo considere oportuno. Para ello, tendrán en consideración el riesgo inherente a dicha decisión, todo ello con el objetivo de evitar la injusticia que la rigidez del anterior sistema pudiera provocar y, en definitiva, potenciar el desarrollo natural del Derecho¹⁹.

En la práctica, sin embargo, es posible flexibilizar la doctrina del precedente a través de la técnica del «*distinguishing*», por la que un juez puede dejar de respetar el precedente asentado por decisiones anteriores (que de otra forma le serían vinculantes), siempre y cuando justifique que, a pesar de las analogías que pudiera presentar, los hechos difieren de los contenidos en el precedente. En suma, la doctrina del precedente o el *case law* garantiza cierta seguridad jurídica, en el sentido de que casos similares serán tratados de forma semejante. Asimismo, la jurisprudencia se centra en situaciones reales, al contrario que la legislación, que solo atiende a la generalidad, tratando de solventar las controversias originadas hasta el momento y prever

¹⁵ *Behrens c. Bertram With Circus Ltd* [1957] 2 QB.

¹⁶ Cross, R. & Harris, J.W., *Precedent in English Law*, op. cit., pág. 97.

¹⁷ *Young c. Bristol Aeroplane Co Ltd* [1944] KB 718.

¹⁸ *London Tramways Co. c. London County Council* [1898] AC 375.

¹⁹ *Practice Statement* [1966] 3 All ER 77.

hipotéticos escenarios futuros. De hecho, una de las principales ventajas de este sistema es que es verdaderamente flexible, de manera que puede impulsar cambios en la regulación más rápidamente que el propio Parlamento²⁰.

VI. Sin embargo, también presenta una serie de **inconvenientes**. En primer lugar, existe una gran variedad y diversidad de decisiones judiciales, lo que dificulta la tarea de encontrar el precedente aplicable al caso en particular. Además, el propio sistema resulta implícitamente muy rígido, en la medida en que los precedentes son vinculantes y, por lo tanto, deben seguirse por los tribunales en la mayoría de las ocasiones. Es decir, cuando un tribunal trata de desviarse del precedente al utilizar la referida técnica del *distinguishing* origina un problema todavía mayor: al separarse del precedente (diferenciando los hechos) puede dar lugar a situaciones en las que dos casos muy similares tengan soluciones judiciales distintas. Por último, a pesar de ser flexible, no se pueden prever realmente los cambios, dado que dependen directamente de una hipotética decisión judicial que se desconoce si llegará a tener lugar.

1.4. Las directrices prácticas y las guías de los tribunales

I. Conforme a la Civil Procedure Act 1997 (ss. 1 a 5, y Anexo 1, párr. 6), el CPR está complementado por directrices prácticas o «*Practice Directions*» (PD). Como ha quedado apuntado, el sistema del CPR consiste en que determinadas áreas del procedimiento civil están reguladas por las Partes («*Parts*») del propio Código y, casi todas ellas, se complementan con una o más PDs. De esta forma, las directrices prácticas 39A y 39B complementan el CPR, Parte 39.

Las directrices prácticas pueden ser creadas por el *Lord Chief Justice* o por una persona por él designada, con el consentimiento del *Lord Chancellor* o con la aprobación del *Lord Chancellor* o del *Lord Chief Justice*. Las PDs cubren tanto aquellas que expresamente complementan al CPR, como las directrices prácticas generales que, en el pasado, fijaron los tribunales.

Los jueces están obligados a seguirlas y carecen del poder de alterar aquellas promulgadas conforme a la sección 5 de la Civil Procedure Act 1997. Del mismo modo que no tienen autoridad para fijar PDs que modifiquen la normativa del CPR o las directrices prácticas promulgadas por el Ministerio de Justicia («*Ministry of Justice*»), dado que de otro modo carecerían de efecto. De esta forma, si una de las directrices prácticas no cumple con los requisitos establecidos en la sección 5 será *ultra vires*²¹. Por el contrario, se permite a los jueces fijar guías en las que sugieran procedimientos a seguir sin infringir lo establecido en la sección 5, siempre que sea congruente con el CPR y con las principales directrices prácticas²².

II. La función de las **guías prácticas** es aportar una orientación sobre la gestión de los procedimientos en los tribunales especiales, al igual que en las principales Divisiones o Salas de que consta el *High Court*. No tienen un rango formal, sino que simplemente son orientativas,

²⁰ Como indicó HAYEK, F.A., en *Lava, Legislation and Liberty: A new Statement of the Liberal Principles of Justice and Political Economy*, Londres, 1982, el mejor escenario posible es aquel en que la legislación se reduce al mínimo y los precedentes legales surgen como la principal fuente del derecho.

²¹ A tenor de la sección 5 de la Civil Procedure Act 1997, las directrices prácticas deberán otorgarse conforme a lo dispuesto en la Parte 1 del Anexo 2 de la Constitutional Reform Act 2005.

²² *Bovale Ltd c. Secretary of State for Communities and Local Government and another* [2008] EWHC 2143.

por lo que no pueden fijar la competencia del tribunal, no deben considerarse como sustitutivas del CPR y tampoco pueden anular las DPs.

1.5. La competencia inherente

I. La competencia inherente («*inherent jurisdiction*»)²³ se confirió, originalmente, a los denominados «*Superior Courts*», dada la propia naturaleza de sus poderes intrínsecos, que no en virtud de una disposición o de una norma, razón por la que se denomina «inherente»²⁴. En términos generales, está ampliamente aceptada la definición que aporta Halsbury's Laws of England²⁵: «En suma, se puede decir que la competencia inherente del Tribunal es una doctrina viable y se ha definido como la reserva o fondo de poderes, una fuente residual de poderes, a la que el tribunal puede recurrir cuando sea necesario, siempre que sea justo o equitativo, y en particular para asegurar la observancia del debido proceso legal, para prevenir la indebida vejación u opresión, para hacer justicia entre las partes y para asegurar un juicio justo entre las mismas»²⁶.

De esta definición, se desprende que el proceso civil está estrictamente controlado. A tal efecto, el *High Court* tiene competencia inherente para controlar su procedimiento, con la finalidad de asegurar que no se utiliza para alcanzar fines injustos.

Con anterioridad a la vigencia del CPR, la normativa reguladora del sobreseimiento como sanción y el desarrollo inicial de la competencia para un auto de embargo, se basaba en la competencia inherente del *High Court*. No obstante, una vez que se ha codificado la materia, la necesidad de recurrir a la competencia inherente se ha visto reducida e incluso ha desaparecido²⁷.

II. En el caso particular del *County Court*, al ser una entidad de Derecho siempre se pensó que no tenía competencia inherente. Sin embargo, en la decisión de *Langley c. North West Water Authority*²⁸, el tribunal concluyó que el *County Court* tenía competencia inherente

²³ La *inherent jurisdiction* se califica como «la fuente de derecho más extraordinaria del sistema legal inglés», JACK, H., en *The Fabric of English Civil Justice*, Steven & Sons Ltd, 1987, pág. 60.

²⁴ JAVED MIANI, Q., «Inherent Jurisdiction». *Pakistan Law Journal (PLJ)*, septiembre 2011, pág. 403.

²⁵ JACOB ISSAC, H., «The Inherent Jurisdiction of the Court», (1970). Vol 23. *Current Legal Problems*, 1970, págs. 23 a 51.

²⁶ Debemos recordar, especialmente, la brillante declaración de Lord Diplock en *Bremer Vulkan Schiffbau und Maschinenfabrik c. Chout India Shipping Corporation Ltd* [1981] AC 909 at 977, cuando su señoría dijo que el *High Court* tiene: «... un poder general para controlar su propio proceso para prevenir que sea utilizado para alcanzar injusticias. Dicho poder es inherente a su función constitucional como tribunal de justicia. Todo sistema de gobierno civilizado requiere que el Estado facilite a los ciudadanos medios para la resolución justa y sencilla de sus respectivos derechos legales. Los medios provistos son tribunales de justicia, a los cuales todo ciudadano tiene acceso, como derecho constitucional, como demandante para obtener la tutela judicial («*remedy*») pretendida, como consecuencia de una supuesta violación por otro ciudadano de sus derechos legales y equitativos, el demandado. La decisión de ejercer o no su derecho de acceso a los tribunales recae exclusivamente en el demandante; si efectivamente decide ejercer tal derecho, el demandado no tiene capacidad de elección; se impone su sujeción a la competencia del tribunal. En consecuencia, se estaría atrofando el papel constitucional del *High Court* como tribunal de justicia, si no ostentara el poder de prevenir el abuso de su proceso de la citada manera, en referencia a su capacidad de alcanzar una decisión justa sobre la disputa».

²⁷ *Harrison c. Tew* [1990] 2 AC 253.

²⁸ *Langley c. North West Water Authority* [1991] 1 WLR 697.

para emitir directrices prácticas²⁹. Por el contrario, el Tribunal de Apelación decidió en *Devon County Council c. B*, que el *County Court* no podía ejercer su competencia inherente en los casos de menores³⁰.

En todo caso, el amplio ámbito de aplicación de la normativa reguladora de los procedimientos ante el *County Court* no deja lugar a la aplicación de la competencia inherente de estos tribunales, incluso si la tuvieran.

2. EL OVERRIDING OBJECTIVE

1. El proceso civil se regula por las Reglas del Procedimiento Civil, contenidas en el CPR, resultado de la reforma de Lord Woolf. Y, como hemos señalado, con anterioridad, cada tribunal tiene sus propias reglas. La modificación más significativa de la reforma es la inclusión por primera vez del «objetivo primordial» o «*overriding objective*», como principio rector del procedimiento civil, contenido en el CPR, en su Regla 1.1.

El «*overriding objective*» se considera como la piedra angular del CPR³¹ y actúa como guía para interpretar las Reglas que contiene³². La incorporación del *overriding objective* supuso la creación de un nuevo paradigma de justicia y representa la principal innovación de la reforma de Lord Woolf³³.

En virtud del *overriding objective*, la principal obligación de los tribunales es hacer justicia³⁴. En este sentido, la Regla 1.1 CPR establece que:

1. Estas reglas son un nuevo código procesal, con el objetivo primordial de permitir al tribunal resolver los casos de forma justa³⁵ y por un coste proporcionado³⁶.

²⁹ De hecho, permitir que el *County Court* tenga la misma capacidad de actuar con su competencia inherente resulta consistente con el principio de que, conforme al CPR, el *High Court* y el *County Court* (salvo las limitaciones recogidas en la CCA 1984, SCA 1981 y la *Jurisdiction Order* 1991) tienen competencias igualmente extensibles.

³⁰ *Devon County Council c. B* [1997] 1 FLR 591.

³¹ CUNNINGHAM-HILL, S. & EIDER, K., *Civil Litigation Handbook 2013-2014*, Oxford University Press, 2013, pág. 9.

³² DWYER, D., *The Civil Procedure Rules: Ten years on*, Oxford University Press, 2009, pág. 73.

³³ SORABJI, J., «The Road to New Street Station: Fact, Fiction and the Overriding Objective», 23 *European Business Law Review*, núm. 1, 2012, págs. 77-89.

³⁴ Las partes deben actuar durante todo el proceso acorde al *overriding objective*, ayudando al tribunal a proceder de conformidad con él. En opinión de Lord Woolf, es del todo lamentable que las partes intenten obtener un beneficio de cualquier asunto. En el mismo sentido, en *Tremer v. City of Stirling* [2002] WASC 281, el tribunal apuntó que la «ligación no consiste en un juego, para el entretenimiento de los abogados comprometidos a dirigirlo, en el que son libres de obtener un beneficio, en cualquier forma que quieran, de los errores, incompetencia o la demora de la contraparte».

³⁵ Precisamente la forma de garantizar la llevanza de los casos de forma justa ha originado ciertas críticas, en la medida en que se trata de un concepto vago y falto de definición, de forma que puede permitir «una discreción judicial subjetiva *ad hoc*, antagónica y potencialmente perjudicial». ANDREWS, N. en «The Adversarial Principle: Fairness and Efficiency» en ZUCKERMAN, A. & CRANSTON R., *Reform of the Civil Procedure: Essays on «Access to Justice»*, Clarendon Press, 1995, pág. 182.

³⁶ La esencia de dicha proporcionalidad es que «el fin no justifica necesariamente los medios». JACKSON, R., «Review of Civil Litigation Costs: Final Report», TSO, 2009, pág. 36. El hecho de que existan hasta tres vías procesales, es un claro indicativo de la importancia que el CPR otorga a la proporcionalidad. Esa proporcionalidad, sin embargo, no limita a las partes la contratación de letrados para la dirección de sus casos, aun cuando ello pueda suponer una diferencia en relación a la notoriedad o calidad de los mismos. *Maltez v. Lewis* [1999] *The Times*.

2. Resolver los asuntos de manera justa y por un coste proporcionado incluye, en la medida de lo posible:
 - a. Asegurar que las partes están en igualdad de condiciones³⁷
 - b. Ahorrar costes³⁸
 - c. Resolver el caso de forma proporcional en relación con:
 - i. La cuantía del procedimiento
 - ii. La importancia del caso³⁹
 - iii. La complejidad del asunto
 - iv. La posición financiera de cada parte
 - d. Asegurar que se resuelve sin dilación y equitativamente⁴⁰
 - e. Destinar una cantidad apropiada de los recursos del tribunal, teniendo en consideración los recursos asignados a otros casos.

Cuando el CPR no aborde expresamente una situación, el tribunal está obligado a considerar qué interpretación refleja de la mejor forma posible el *overriding objective* cuando interpretar la normativa (r. 1.2 (b) CPR). No obstante, si bien la Regla 1.2 CPR determina que el tribunal debe interpretar la normativa conforme al mencionado *overriding objective*, el Tribunal de Apelación dictaminó que dicha norma no resulta de aplicación si la normativa es clara en sus términos.

II. A tenor de la Regla 1.4 (1) del CPR, el tribunal debe promover el *overriding objective* al gestionar activamente los casos⁴¹. Lo anterior comprende:

- Promocionar la cooperación entre las partes en la dirección del proceso.
- Identificar los asuntos en una fase temprana⁴².
- Decidir sin demora qué asuntos necesitan una investigación a fondo y un juicio.
- Decidir el orden en que los asuntos deben ser resueltos.
- Promover el uso de medios alternativos de resolución de conflictos o *Alternative Dispute Resolution* (ADR), si el tribunal lo considerase oportuno.
- Ayudar a las partes a llegar a un acuerdo sobre la totalidad o parte del caso.
- Fijar el horario o controlar de otra forma el progreso del caso⁴³.

³⁷ Este requisito no es absoluto, en la medida en que, otras consideraciones, como la proporcionalidad o la llevanza justa del caso pueden anteponerse. Ciertamente, la justicia no siempre se puede calibrar en términos económicos y el juez está facultado para medir el estrés que el litigio alige a las partes. De esta forma, la prisión que puede soportar una persona física es seguramente superior en relación con las personas jurídicas (*Kettner v. Hansel Properties* [1987] AC 189 a 220). Por otro lado, el hecho que una parte esté mejor informada o asesorada no infringe este precepto, salvo que la diferencia sea muy sustancial y especialmente perjudicial (*Hentley v. Bloom* [2010] 1 WLR 1770).

³⁸ Conforme a *A v N Holding v. Andell* [2006] NSWSC 55 a [32], la gestión activa de los casos puede acarrear el incremento de ciertos costes (por ejemplo, requerimientos de más documentación), de manera que el tribunal debe valorar diligentemente cuánta gestión es necesaria en cada caso.

³⁹ Aunque debemos advertir que la norma no concreta el significado de «importancia».

⁴⁰ Evitar la dilación de los casos es una cuestión de interés público (*Hughes v. Gales* [1995] 14 WMR 434 a 450) al repercutir negativamente en los costes incurridos. Se ha sostenido que, consecuencia del *overriding objective*, no es posible obtener una ventaja de un error técnico en la aplicación de las Reglas (*Hertsmere Primary Care Trust v. Estate of Rabindra-Ahanda* [2005] EWHC 20).

⁴¹ *Ratfin v. British Steel* [1994] 1 WLR 732 a 739.

⁴² El principal objetivo es potenciar las transacciones o acuerdos entre las partes y reducir los costes del litigio.

⁴³ Aunque no se define qué se entiende por ayuda, se presupone una actitud del propio juez, como parte de sus funciones, al gestionar activamente el caso en particular (*Hart v. Relentless Records* [2002] EWHC 1984).

- Considerar si los potenciales beneficios de tomar una determinada medida justifican su coste.
- Resolver cuantos aspectos del caso se puedan en un mismo acto.
- Resolver el caso sin que las partes tengan que acudir a Sala.
- Hacer uso de la tecnología⁴⁴.
- Proporcionar las directrices necesarias para asegurar que el enjuiciamiento de un asunto se lleva a cabo rápida y eficientemente.

Todo ello, además, se complementa con la Regla 1.2 CPR en virtud de la cual «los tribunales deberán buscar la aplicación del *overriding objective* cuando (a) ejerzan cualquier poder otorgado por las Reglas; o (b) interprete cualquier Regla».

En términos generales, el tribunal llevará a cabo una gestión activa del procedimiento en los siguientes casos:

- En la fase de adjudicación, cuando el tribunal no solo asigne a una vía procesal («*track*»)⁴⁵, sino que también aporte directrices fijando un horario para los futuros pasos en el procedimiento. Los jueces mantienen una posición activa en la gestión de las vistas, cuando se busca identificar y delimitar los asuntos correspondientes entre las partes y asegurar el trabajo necesario para que el juicio se lleve a cabo en el menor tiempo posible
- Cuando el tribunal establece directrices sobre las pruebas que permitan presentarlas en el juicio. Algo que resulta de aplicación especialmente a las pruebas periciales, sobre las que el tribunal puede determinar que resultan innecesarias; o puede decidir, por ejemplo, que debería presentar un único perito designado conjuntamente por las partes; o que la prueba pericial quede restringida a los informes escritos, etc.
- Al fijar una fecha para el juicio, el tribunal se preocupará de asegurar que el juicio tenga lugar con la menor demora posible. Las partes responsables de un retraso pueden ser penalizadas mediante la imposición de sanciones

Durante el acto del juicio, el tribunal tiene amplias facultades para controlar la sucesión de acontecimientos que tienen lugar y puede imponer límites a la presentación de pruebas o puede pronunciarse sobre la duración de las intervenciones de los letrados.

⁴⁴ Los tribunales deben utilizar cuantos medios tecnológicos estén a su alcance para mejorar la eficiencia y reducir los costes económicos (*Tari c. Minister of Health* [2002] *WUSC* 42).

Por su parte, el Tribunal de Apelación determinó que el uso de la tecnología es exclusivamente aceptable si ahorra tiempo o dinero y, siempre y cuando, no cause un perjuicio injusto a alguna de las partes (*Morris c. Bank of America National Trust* [2000] 1 *All ER* 954).

⁴⁵ *Vid. infra* Capítulo VII.

CAPÍTULO II

SUJETOS Y OBJETO DEL SISTEMA LEGAL INGLÉS

1. LA COMPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRIBUNALES

I. De forma preliminar, es preciso indicar que el Reino Unido no tiene un sistema legal unificado, sino que se divide en (i) Inglaterra y Gales, (ii) Escocia e (iii) Irlanda del Norte. Esta obra abordará las particularidades del sistema procesal civil de Inglaterra y Gales o inglés.

La organización jurisdiccional inglesa se divide en dos tipos de Tribunales de Justicia: **tribunales inferiores y tribunales superiores**. Los Tribunales inferiores son: los Tribunales de Magistrados («*Magistrates' Courts*») y el Tribunal del Condado («*County Courts*»).

Los Tribunales superiores o *Senior Courts* de Inglaterra y Gales son: el Tribunal de la Corona («*Crown Courts*»)⁴⁶; el Tribunal Superior de Justicia («*High Court of Justice*») y como superior jerárquico de estos dos últimos, el Tribunal de Apelación («*The Court of Appeals*»), que conocerá en segunda instancia⁴⁷. Como última instancia se encuentra el Tribunal Supremo («*The Supreme Court of the United Kingdom*»)⁴⁸.

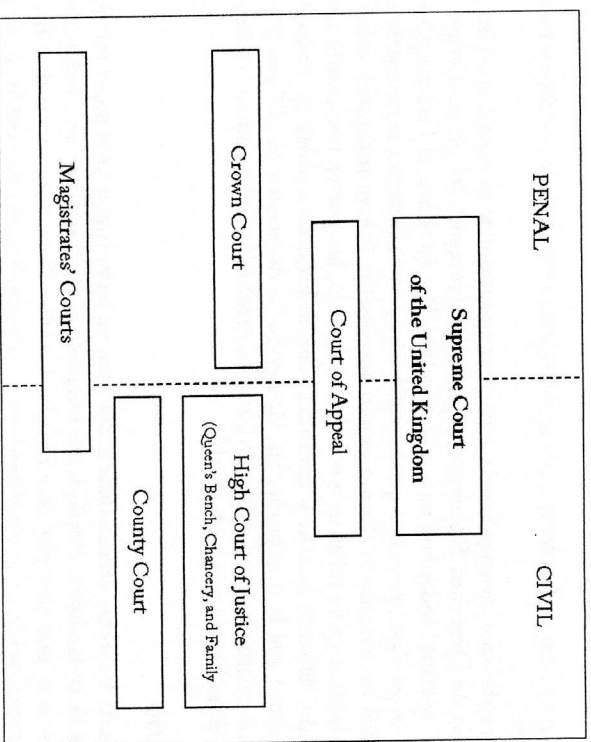
Por último, mención especial merece el *Judicial Committee of the Privy Council*, fundado en 1833 a raíz de la Judicial Committee Act 1833 y considerado como el órgano judicial en última instancia para conocer, principalmente, de las apelaciones de algunos países del *Commonwealth* (como Bahamas y Jamaica) y de territorios británicos de ultramar (por ejemplo, las islas Malvinas o Gibraltar).

II. Los procedimientos civiles de primera instancia en Inglaterra y Gales pueden iniciarse ante (i) el *High Court of Justice*, o ante (ii) el *County Court*, si bien, en limitadas ocasiones, se puede comenzar el procedimiento ante (iii) los *Magistrates' Courts*.

⁴⁶ El *Crown Court* es competente para conocer de los asuntos penales de mayor gravedad (por ejemplo, asesinatos, violaciones, etc.), algunos de ellos se sustancian en grado de apelación.

⁴⁷ El *Her Majesty Courts & Tribunal Service* gestiona, desde el 1 de abril de 2011 (cuando se fusionaron el *Her Majesty Courts* y el *Tribunal Service*), la administración del *Crown Court*, *Magistrates' Court*, *County Court* y *Court of Appeal*, con el objetivo de «dirigir de forma eficiente y efectiva los tribunales y el sistema judicial, que permita mantener el principio de legalidad y facilitar el acceso a la justicia para todos». («*Her Majesty Courts & Tribunal Service Framework Document*», abril 2011, para. 2.2.).

⁴⁸ En el Capítulo III, se aborda la composición y administración de los tribunales ingleses y se desarrollan los principios y normas aplicables para la atribución de jurisdicción internacional y los principios aplicables a jurisdicción y competencia.



2. EL ÓRGANO JUDICIAL

2.1. Introducción

I. La judicatura juega un papel esencial en la administración de justicia en Inglaterra y Gales porque el juez tiene atribuida la importante función de **creación de Derecho**. Sus resoluciones, conforme al principio de legalidad («*rule of law*»)⁴⁹, se espera que sean completamente imparciales, en aplicación estricta de la ley y sin que puedan estar influenciadas por opiniones personales o prejuicios de ningún tipo y que lleven a cabo un control efectivo del ejercicio del poder estatal⁵⁰.

II. En Inglaterra y Gales existen diversos tipos de jueces. Los de mayor rango son los jueces del Tribunal Supremo (pueden ser hasta 12) que también se sientan en el *Privy Council*. El siguiente nivel jerárquico son los jueces del *Court of Appeal* (conocidos como *Lord o Lady Justice of Appeal*)⁵¹ seguidos por los jueces del *High Court* (denominados *puisne judges*) que también conocerán en ocasiones de algunos asuntos en el *Crown Court*⁵².

⁴⁹ DICEY, A.V., en *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Elthron Classics, 2005, pág. 183, afirma que el principio de legalidad tiene tres elementos: el primero es que la sanción es la consecuencia natural de un incumplimiento, por lo que no debería imponerse aquella sin el previo incumplimiento; asimismo en aplicación del principio, una única ley debería regir a todos; y, por último, que los derechos de los individuos no se garantizan a través de una constitución escrita, sino gracias a la decisión de los jueces.

⁵⁰ Esta última función, la de control del ejercicio del poder estatal, la llevan a cabo principalmente a través de un procedimiento especialmente previsto: la revisión judicial o «*judicial review*».

⁵¹ Mientras que la Sala de lo Civil está presidida por el *Master of the Rolls*, la Sala de lo Penal la preside el *Lord Chief of Justice*.

⁵² Estos jueces reciben el título de caballero, al igual que los jueces del *Court of Appeal* y del *Supreme Court*, cuando se dirige a ellos se les llama Mr. o Ms. Justice, seguido del apellido del magistrado.

Por otro lado, los *circuit judges* son aquellos magistrados que, viajando a lo largo de todo el territorio, conocen de los casos en los que sea competente el *County Court* y, excepcionalmente, el *Crown Court* o incluso en la Sala de lo Penal del *Court of Appeal*. Un paso previo al *circuit judge* se puede considerar los *recorders*, *solicitors* o *barristers* en ejercicio con al menos 10 años de experiencia que conocen de los asuntos menos complejos de los que es competente el *County Court* o, especialmente, el *Crown Court*. Los *district judges* se ocuparán de la mayoría de los asuntos ante el *County Court*, además de aquellos que conozca el *district registry del High Court*⁵³. Seguidamente, los también denominados *district judges* pero del *Magistrates' Court* conocerán exclusivamente de los casos que sea competente el referido tribunal.

A la cabeza de la judicatura está el Presidente de las Cortes de Inglaterra y Gales, que en la práctica es el *Lord Chief of Justice*, quien preside a su vez el *Court of Appeal*, el *High Court*, el *Crown Court*, el *County Court* y los *Magistrates' Courts*.

III. Tras la revolucionaria reforma del sistema procesal inglés, llevada a cabo por Lord Woolf, se inició una etapa dedicada a la gestión del procedimiento en su conjunto, es decir, el *tier* que se desarrolla desde la interposición de la demanda hasta el acto del juicio⁵⁴. De esta suerte, se introdujeron los denominados como jueces encargados del procedimiento o «*procedural judges*» que, en una primera etapa, tendrán una función de intervención en el control del proceso y la conducta de las partes⁵⁵, al comprobar que se hayan cumplido con todas las condiciones requeridas legalmente para que una acción sea enjuiciada; momento, a partir del cual, será competente otro juez, encargado exclusivamente del acto del juicio o «*trial judge*».

Según Lord Woolf, la función de *procedural judge* se encargará, generalmente, a un *district judge* o en el *High Court* a los denominados *masters* o *recorders*, salvo en los asuntos especialmente complejos, en cuyo caso las mencionadas funciones de control las desarrollará un *Circuit judge* o un *High Court judge*⁵⁶.

2.2. Nombramiento

El nombramiento de los miembros de la judicatura se modificó sustancialmente tras la entrada en vigor de la **Constitutional Reform Act 2005**, que estableció el *Judicial Appointments Commission* como órgano responsable del nombramiento de los jueces, formado por 14 miembros elegidos por la Reina, a recomendación del *Lord Chancellor*. En un principio, el *Lord Chancellor* jugaba un papel crucial. Según su consejo, la Reina nombraba a los *High Court judges*, *circuit judges* y *recorders*; y el Primer Ministro, siguiendo nuevamente las indicaciones del *Lord Chancellor*, aconsejaba a la Reina los candidatos para *Lords of Appeal* (anteriores jueces del *House of Lords*) y *Lords Justices of Appeal* (jueces del *Court of Appeal*). Tradicionalmente, los *barristers* eran los únicos que podían presentarse a *senior judges*, una limitación que, en la actualidad, ha desaparecido⁵⁷.

⁵³ Un *district registry* es parte del *High Court* situado en varios distritos de Inglaterra y Gales, competente en ciertos casos de familia y civiles de que conozca el *High Court*.

⁵⁴ LORD WOOLF, «Access to Justice (Final Report)» julio 1996, disponible en www.dca.gov.uk/civil/final/index.htm.

⁵⁵ En el Final Report de julio de 1996, para. 8.13, Lord Woolf enfatiza que se trata de una mera función, que no un título para un nuevo tipo de juez.

⁵⁶ Final Report de julio de 1996, para. 1.4.

⁵⁷ Actualmente, la selección de los miembros de la judicatura se basa exclusivamente en la concurrencia de méritos y no en una oposición pública que requiera un conocimiento especializado, como ocurre en otras jurisdicciones de tradición civilista.

Este proceso se consideraba injusto, en la medida en que beneficiaba a las personas con mejor red de contactos, en lugar de premiar exclusivamente los méritos y aptitudes del candidato, lo que propició la mencionada reforma⁵⁸.

2.3. Competencia y deber de independencia

I. Como ha quedado apuntado, en el sistema inglés la **competencia** de los jueces depende del momento procesal en el que nos encontremos. Así, el procedimiento civil se divide en la fase de enjuiciamiento y la fase procesal previa. En relación a la celebración del juicio, la competencia depende a su vez de la vía procesal a que se asigne el asunto y del tribunal⁵⁹.

En el *County Court*, los *district judges* son competentes en relación con las reclamaciones asignadas a la *small y fast track*; mientras que los *circuit judges* solo serán competentes en las reclamaciones del *small track* si prestan su consentimiento.

En las reclamaciones que se lleven a cabo en la *multi-track*, la norma general es que los *High Court judges* serán competentes y, en ocasiones, también serán competentes los *circuit judges y recorders* en el *County Court*. Por otro lado, los *masters* y los *district judges* en el *High Court* serán competentes para enjuiciar las denominadas *Part 7 claims* si las partes dan su consentimiento⁶⁰.

II. No obstante lo anterior, el juez será competente siempre y cuando no exista ningún elemento que pudiera, efectivamente, inferir en su **independencia e imparcialidad**, dado que, en ningún caso, un juez puede ser competente para enjuiciar su propia causa (*nemo iudex in sua causa*). Algo que se extiende a aquellas ocasiones en que el juez pudiera tener un interés de cualquier tipo en el resultado del proceso, lo que pondría inexorablemente en tela de juicio su independencia. La inhabilitación del juez queda limitada por el principio de *minimis*, conforme al cual no se tendrá en consideración el interés financiero o monetario que el juez pudiera tener en relación con la causa cuando éste fuera muy reducido.

En el caso de que existieran dudas sobre la imparcialidad o independencia del juez, el *House of Lords* determinó que es preciso demostrar si, una vez analizadas todas las circunstancias del caso, «esas circunstancias podrían llevar a concluir a un observador imparcial e informado que existe una posibilidad real de que el tribunal sea parcial»⁶¹. Como resultado, los jueces no solo deben ser imparciales e independientes sino también parecerlo, a la vista de un «observador imparcial»⁶². El fundamento de la necesidad de aparentar imparcialidad, descansa en la injusticia que supondría que un juez estuviera predispuesto a favor de una de

⁵⁸ Asimismo, otra de las notas características de los jueces, en Inglaterra y Gales, es su vestimenta, dado que deben llevar pelucas de pelo de caballo y togas. Desde 2008, el uso de pelucas no es obligatorio para los jueces en los casos civiles, si bien en la jurisdicción penal siguen siendo extremadamente útiles para fomentar el anonimato, de manera que no se pueda reconocer fácilmente a los jueces.

⁵⁹ Como veremos más adelante (*infra* Capítulo VII), con el afán de destinar los recursos precisos y necesarios al enjuiciamiento de cada caso, los asuntos se asignarán a una de las tres vías procesales disponibles. El proceso varía dependiendo de la vía procesal, de manera que cada una tiene sus particularidades.

⁶⁰ Para un mayor desarrollo de las *Part 7 claims*, *vid.*, Capítulo V.

⁶¹ *Porter v. Magill* [2002] 2 A.C. 357 (H.L.).

⁶² Por ejemplo, el juez no podrá formarse o que parezca que se ha formado una opinión firme sobre la credibilidad de una prueba de parte antes de la práctica de la prueba por el resto de partes personadas en el procedimiento (*Steadman-Byrne v. Anjad* [2007] EWCv Civ 625, *The Times*).

las partes, en perjuicio de las demás, por razones inconexas con los hechos y fundamentos del caso enjuiciado.

La imparcialidad e independencia encuentra igualmente su reflejo en el art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, según este precepto, las partes tienen derecho a ser oídas «por un tribunal independiente e imparcial». Por lo tanto, el juez no podrá ser competente cuando tenga algún prejuicio que le pudiera impedir mantener la necesaria independencia e imparcialidad mencionadas. Como consecuencia, los jueces informan sobre cualesquiera conflictos de interés que pudieran tener. Acto seguido, las partes tan pronto como conozcan esa información, deberán decidir si continúan con el proceso o piden la recusación del juez.

Baste indicar que la jurisprudencia, siguiendo lo dispuesto en *AT and T c. Saudi Cable*, entiende que el mismo baremo utilizado para comprobar la independencia e imparcialidad de los jueces ha de aplicarse a los árbitros⁶³.

3. EL JURADO

I. Otra de las notas características del sistema legal inglés es el papel que juega el jurado en el proceso. A todas luces, ciertamente reducido si se compara con otras jurisdicciones del *common law* como, por ejemplo, con Estados Unidos. Este sistema ha sido muy elogiado al permitir la participación de la ciudadanía en la administración de justicia, aunque también se ha criticado su posible falta de capacidad o de imparcialidad. La importancia del jurado ha ido disminuyendo con el paso del tiempo. En términos generales, la gran mayoría de los procesos civiles se resuelven ante un juez o magistrado, aun cuando determinadas controversias podrán enjuiciarse por un procedimiento con jurado. En la actualidad, el procedimiento del jurado existe tanto en la jurisdicción penal como, de forma más aislada, en la civil. En todo caso, la *Senior Courts Act 1981* limita su aparición a un número muy reducido de procedimientos, como pueden ser: detenciones ilegales, casos de fraude o de difamación y calumnias.

De esta forma, en el *County Court* y en la *Queen Bench Division* del *High Court* podrán celebrarse juicios con jurado en un número restringido de ocasiones, enumeradas en la sección 69(1) de la *Senior Court Act 1981*⁶⁴. Teóricamente, los tribunales gozan de la discreción suficiente para ampliar los casos que puedan ser resueltos por personas legos en derecho, pero, en la práctica, se han mostrado especialmente reticentes a permitir el enjuiciamiento de causas por jurado más allá de las previstas expresamente en la ley, tal y como confirmó el *House of Lords* (actual *Supreme Court*), en su conocida sentencia de *Williams v. Beesley*⁶⁵.

II. La *Juries Act 1974* regula gran parte del **procedimiento** jurado y establece que todas las personas, salvo aquellas expresamente excluidas por la ley, podrán ser seleccionadas para actuar como parte de un jurado. Una vez elegida y notificada a la persona su elección, tiene la obligación de asistir, bajo pena de ser condenado por desacato al tribunal; de forma excepcional, la ley recoge ciertas circunstancias conforme a las que se le podrá excusar de este deber.

⁶³ *AT and T corporation v. Saudi Cable Co.* [2002] 2 *Lloyd's Rep.* 12. Por el contrario, en Estados Unidos, a los árbitros se les deberá aplicar un baremo más estricto, conforme a lo dispuesto por el Tribunal Supremo en *Commonwealth Coating v. Continental Casualty* [1968].

⁶⁴ Son ejemplo de ello, las disputas sobre difamación o calumnia.

⁶⁵ *Williams v. Beesley* [1973] 1 *WLR* 1295.

Las partes disponen de un plazo de 28 días desde la notificación de la demanda para solicitar que el litigio sea resuelto a través del procedimiento jurado. El número de personas que conforman el jurado varía dependiendo del tribunal (*County Court* o *High Court*) y su selección y recusación la regula la Juries Act 1974.

III. La función del jurado se limita a analizar las cuestiones de hecho conflictivas que el juez haya determinado porque las cuestiones de Derecho quedan reservadas al órgano judicial. Los miembros del jurado deberán, en todo momento, intentar alcanzar un veredicto por unanimidad o, cuando ello no sea posible, se aplicará el sistema de mayorías establecido en la Juries Act 1974. De no conseguir la mayoría se disolverá y se suspenderá el procedimiento.

El jurado debe examinar los hechos del caso y, con base en las pruebas presentadas, llegar a un veredicto. Las deliberaciones son secretas y el deber de guardar secreto continúa incluso una vez haya finalizado el procedimiento, bajo pena de incurrir en un delito. Se pretende, así, asegurar la libertad de los miembros del jurado en sus deliberaciones y evitar potenciales instigaciones o influencias del exterior. Como es lógico, sin ese deber de guardar secreto, sin garantizar la confidencialidad, gran parte de la ciudadanía sería muy reticente a participar como miembro del jurado.

IV. En todo caso, el juez tendrá la facultad de prescindir del jurado en aquellas situaciones en que lo considere preciso. En este sentido, conforme a *Phillips v. Commissioner of Police of the Metropolis*, el juez deberá preguntarse si el caso en particular: (i) requiere de un extenso examen de documentos o periciales, (ii) si de necesitar de dicho examen, el jurado estaría suficientemente capacitado y (iii), de no estar capacitado, si el tribunal debiera ejercer su discreción⁶⁶.

En consecuencia, la decisión final de celebrarse un juicio con jurado, recae en el juez que, discrecionalmente, deberá tomar una decisión⁶⁷, valorando las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de procedimientos y, sin ninguna predisposición o perjuicio, en relación a cualquiera de las posibles opciones⁶⁸.

4. EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN LETRADA

I. El ejercicio de la profesión legal, en Inglaterra y Gales, al contrario de lo que ocurre en la mayoría del resto de jurisdicciones, es un sistema dual, dividido entre *solicitors* y *barristers*. Si bien el término «abogado» (*«lawyer»*) se utiliza para describir ambas profesiones, el de letrado (*«counsel»*) es específico de los *barristers*.

Las **funciones** de los letrados son heterogéneas: los *solicitors* se ocupan de la mayoría del asesoramiento legal; mientras que los *barristers* ejercen la defensa oral de la abogacía, representando al cliente en Sala, esto es, en el proceso judicial ante un tribunal (*«advocacy»*); si bien, también se ocupan de la redacción de algunos de los principales documentos necesarios en la asistencia letrada del cliente, como los *statements of case*⁶⁹.

Tradicionalmente, la separación de funciones estaba muy definida, de manera que los *solicitors* se ocupaban, en exclusiva, del asesoramiento legal del cliente, teniendo muy limitado el *right of audience*, entendido como la facultad jurídica de actuar como representación letrada ante un tribunal⁷⁰. Los *barristers*, por el contrario, eran los encargados de la representación letrada del cliente ante cualquier tribunal. Hasta 2004, los *solicitors* eran los únicos que podían ser contratados directamente por el cliente, de manera que lo *barristers* actuaban a petición posterior del *solicitor*. No obstante, como veremos, estas diferencias se han diluido con el paso del tiempo, hasta tal punto que han surgido críticas este sistema dual, que abogan por la fusión de las dos categorías⁷¹.

II. Así pues, la función principal de los *solicitors* consiste en la prestación del asesoramiento legal y en la actuación en representación de sus clientes en la mayoría de las situaciones. Sus funciones y ejercicio están regulados, principalmente, por la Legal Services Act 2007. De esta forma, es el cliente quien contrata al *solicitor* que, generalmente, trabaja asociado con otros *solicitors* formando sociedades, cuya responsabilidad puede ser personal (*«partnership»*) o limitada (*«Limited Liability Partnership»* o LLP). Por ejemplo, en Londres, al conjunto de las principales sociedades o firmas de abogados se las conoce como *Magic Circle*.

Su órgano de representación es la *Law Society for England and Wales*, conocida popularmente como la *Law Society*. Tradicionalmente, la *Law Society* actuaba como órgano de representación al igual que como organismo regulador de los *solicitors*; en la actualidad, ésta última función la lleva a cabo la *Solicitors Regulation Authority* quien, por ejemplo, ejerce esa actividad al emitir un Código de Conducta que recoge los deberes de los *solicitors*⁷².

El proceso para convertirse en *solicitor* consta de tres etapas. En primer lugar, el candidato deberá tener una titulación universitaria (*«degree»*) en Derecho o, en caso contrario, una titulación en cualquier otra materia y haber superado el *Common Professional Examination* (CPE). El siguiente paso consiste en un año de *Legal Practice Course* (LPC), cuyo objetivo es promover las habilidades y el conocimiento necesario para la práctica de la abogacía. Finalmente, una vez superadas las anteriores etapas, el potencial *solicitor* deberá cumplir dos años de aprendizaje, generalmente, en un despacho de abogados, denominado *training contract*⁷³. Una vez se haya alcanzado la categoría de *solicitor*, se requiere continuar con el aprendizaje, con el afán de no quedarse obsoleto, cumpliendo con un mínimo de 16 horas anuales de desarrollo profesional o *Continuing Professional Development* (CPD). Aquellos abogados, cualificados o habilitados

⁷⁰ En un principio, los *solicitors* solo tenían el *right of audience* ante los tribunales inferiores, es decir, los *Magistrates' Courts* y el *County Court*.

⁷¹ De entre los argumentos a favor de esa fusión, cabe destacar la reducción de los costes que, presuntamente, conllevaría la supresión de este sistema dual, en el que el cliente tiene que hacer frente a los honorarios del *solicitor* y del *barrister*; o la minimización de la dualidad de funciones que supone que el *barrister* tenga que prepararse para la defensa del cliente y estudiar un caso que, anteriormente, ha sido preparado por un *solicitor*, algo que mejoraría la eficiencia del sistema. Por el contrario, en defensa del actual sistema, se esgrime que los *barristers* garantizan una mayor independencia del sistema judicial, al no estar agrupados en sociedades y, como consecuencia, del principio *«cab rank»*, no podrán rechazar la llevanza de los casos, salvo en contadas ocasiones. En el mismo sentido, se entiende que garantizar un adecuado ejercicio de la profesión legal, al estar especializados en la representación letrada ante los tribunales, lo que requiere unas habilidades diferentes y que distan de las necesarias en el caso de los *solicitors*.

⁷² Como consecuencia, la inscripción a la *Law Society* ya no es obligatoria, sino que la participación en esta sociedad profesional es meramente voluntaria.

⁷³ Durante esta etapa, al abogado se le denomina *«trainee»*.

⁶⁶ *Phillips v. Commissioner of Police of the Metropolis* [2003] EWCA Civ 382, *The Times*.

⁶⁷ Consecuentemente, al tratarse de una decisión fundamentada en criterios puramente discrecionales, resulta ciertamente complicada cualquier apelación frente a la decisión que acuerde el tribunal (*Gryson Channel Four Television Corporation* [2002] EWCA Civ 941).

⁶⁸ *Armstrong v. Times Newspapers Ltd* (No.2) [2006] 1 WLR 2462.

⁶⁹ *Vid. infra* Capítulo V.

para el ejercicio de la profesión en otras jurisdicciones, que quieran ejercer, en Inglaterra y Gales, deberán superar un examen para convertirse en *solicitors*: el *Qualified Lawyers Transfer Scheme* (QLTS).

III. La función principal de los *barristers* consiste en la representación letrada de los clientes ante cualquier tribunal («*advocacy*») y la redacción de ciertos documentos. Hasta la entrada en vigor de la Courts and Legal Services de 1990 y la Access to Justice Act 1999, los *barristers* eran los únicos encargados de la representación letrada del cliente ante los denominados *Senior Courts* (esto es, el *Court of Appeal*, el *High Court* y el *Crown Court*)⁷⁴.

A diferencia de los *solicitors*, el ejercicio profesional de los *barristers* es autónomo, de manera que no pueden formar sociedades; generalmente, se suelen agrupar y compartir oficinas, denominadas, *Chambers*. Desde 2004, los *barristers* con hasta tres años de experiencia pueden ser contactados directamente por los clientes.

Su función de representación letrada, al contrario que en el caso de los *solicitors*, está sujeta a ciertas limitaciones, de manera que no podrá rechazar ningún caso (*cab rank rule*). De esta forma, se pretende asegurar la representación letrada del público en general y evitar así casos de discriminación. Su órgano de representación es el *Bar Council* que, al igual que la *Law Society*, ha separado sus funciones de representación y de regulación, que ostenta el *Bar Standards Board*.

El proceso para convertirse en *barrister* versa del anteriormente expuesto para los *solicitors*. El candidato deberá haber terminado satisfactoriamente su licenciatura en Derecho o en otra disciplina, siendo requisito en éste último caso haber completado además un curso de un año de duración para la preparación del *Common Professional Examination*. A continuación, deberán formar parte de uno de las cuatro asociaciones profesionales de *barristers* («*Inns of Courts*»)⁷⁵ y superar el *Bar Professional Training Course* (BPTC)⁷⁶. Finalmente, terminado el BPTC, los candidatos podrán ser admitidos como *barristers* («*called to the Bar*») y deberán comenzar un periodo de pasantía («*pupillage*») de un año, durante el cual prestarán sus servicios a un *barrister* colegiado. Por último, superadas todas las anteriores etapas, el *barrister* deberá encontrar un *Chambers* en el que ejercer de forma estable su profesión (lo que se conoce como *tenancy*). Al igual que ocurre con los *solicitors*, los *barristers* tienen un deber de formación continuada a lo largo de su carrera profesional, con un número de horas anuales de obligado cumplimiento en formación.

IV. Por último, tanto los *solicitors* como los *barristers*⁷⁷, tras ejercer su profesión, durante un mínimo de 10 años, pueden optar a la distinción de *Queen's Counsel*⁷⁸, que supone el reconocimiento como profesional de mayor grado, que conlleva automáticamente un aumento

⁷⁴ Más adelante, aportaremos una mayor explicación de la composición y administración de los tribunales ingleses y se desarrollarán los principios y normas aplicables para la atribución de jurisdicción internacional y de jurisdicción y competencia (vid. *infra* Capítulo III).

⁷⁵ Los cuatro *Inns of Court* están situados en Londres y son: Inner Temple, Middle Temple, Gray's Inn y Lincoln's Inn.

⁷⁶ A esta fase, eminentemente práctica, se la denomina de formación profesional o *vocational training*, con una duración de un año a tiempo completo o de dos años a tiempo parcial. Tiene como objetivo principal, proporcionar al aspirante a *barrister* los conocimientos esenciales para la práctica de la abogacía ante los tribunales, al igual que para la correcta redacción de documentos y opiniones legales.

⁷⁷ Desde 1996, los *solicitors* también pueden presentarse a *Queen's Counsel* pero, en la práctica, la inmensa mayoría son *barristers*. De hecho, por ejemplo, hasta 2006, solo seis *solicitors* llegaron a obtener esta distinción.

⁷⁸ *King's Counsel*, cuando el monarca es un varón.

considerable de sus honorarios, dado que solo deberá conocer de determinados asuntos, acorde a su nueva posición.

Su nombramiento se realiza atendiendo a los méritos del candidato, en una competición pública, donde se tendrá en consideración las referencias de otros profesionales legales, tales como jueces, abogados o incluso clientes.

V. En todo caso, tanto los *solicitors* como los *barristers* ostentan un **deber de confidencialidad** para con el cliente, de manera que no podrán desvelar, salvo autorización en ese sentido, información sobre éste a cualquier persona ajena al proceso. El deber de confidencialidad implica que la documentación utilizada por el *solicitor* o *barrister* goce de la protección del secreto profesional, lo que, como veremos, tiene importantes consecuencias en el denominado *disclosure*⁷⁹.

5. LAS PARTES DEL PROCESO CIVIL

5.1. Las partes

I. El proceso civil inglés se caracteriza por ser un **procedimiento adversarial** en el que dos o más partes enfrentadas, con o sin representación letrada, tratan de resolver judicialmente una disputa. El CPR regula detalladamente el proceso para evitar que se cometan excesos en el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la justicia. Los tribunales son un mecanismo de resolución de disputas que solo deberá utilizarse cuando sea estrictamente necesario y, en aquellas ocasiones, en que las partes guarden una relación directa con el procedimiento, de manera que defiendan un interés real y legítimo en el litigio. De este modo, no todas las personas físicas o jurídicas podrán ser «parte», es decir, poder demandar y ser demandado, en un procedimiento. Para ello deberán tener capacidad suficiente y no estar inhabilitadas.

II. Las **personas físicas** podrán ser parte procesal, siempre y cuando, sean mayores de edad y no sufran de alguna incapacidad. El CPR define como «menor» a aquella persona con una edad inferior a 18 años. Y, siguiendo lo preceptuado en la sección 2.1 de la MCA 2005, se considerará a una parte como «persona protegida» si es incapaz de tomar una decisión por sí misma, en relación al asunto en particular, debido a una discapacidad o trastorno mental y será irrelevante si la discapacidad o trastorno es temporal o permanente (s. 2.2 MCA 2005). En todo caso, se considerará a una persona incapaz de decidir por sí misma si no pudiera entender la información relevante para poder tomar una decisión informada, retener y valorar la información recibida como parte del proceso de toma de decisión o fuera incapaz de comunicar la decisión que hubiera tomado. Sin embargo, se presumirá que comprende la información si fuera capaz de ello con la explicación necesaria, utilizando lenguaje simple, ayudas visuales o cualquier otro método (s.3 MCA 2005).

Tanto las partes protegidas como los menores deberán disponer de una persona que les asista durante el proceso, denominada «*litigation friend*» (r. 21.2 CPR). Hasta que no se hubiera nombrado al asistente legal no se podrá continuar con el proceso, salvo con autorización expresa del tribunal. *Litigation friends* podrán ser: los nombrados según la sección 16 de la Mental Capacity Act 2005, los nombrados ex profeso por el tribunal o la persona que pueda representar los intereses del demandado o demandante sin que tenga un interés directo

⁷⁹ *Vid., infra* Capítulo VIII.

en el resultado del proceso. En el caso de un menor (no de una parte protegida), el tribunal podrá permitir su actuación en juicio sin la asistencia del *litigation friend*, pudiendo revocar su decisión cuando lo estime oportuno (rr. 21.2(3) a 21.2(5) CPR).

El *litigation friend* del demandante deberá comprometerse a pagar las costas en que pudiera ser condenado; no así el del demandado (r. 21.4(3) CPR). Asimismo, podrá recuperar, en todo caso, los gastos que hubiera incurrido en la representación, siempre que fuesen razonables (r. 21.12 CPR). Si el *litigation friend* actúa en representación de un menor que adquiriese capacidad al alcanzar la mayoría de edad cuando el procedimiento está aun en marcha, deberá notificarlo a las otras partes y al tribunal. A partir de ese momento, el cargo del *litigation friend* cesará.

III. El CPR reconoce capacidad para ser parte a las **personas jurídicas**. Los estatutos sociales de la sociedad confieren a los administradores un poder general de representación y, por tanto, la representación ante los tribunales. El poder de representación podrá otorgarse a favor de un único administrador o mancomunadamente a varios administradores (excluyendo así a los accionistas). La decisión del administrador o administradores deberá estar siempre dirigida al cumplimiento de sus deberes para con la sociedad, conforme a las secciones 171 a 177 de la Companies Act 2006. Si el administrador (o administradores) investido con poder de representación se negase —en incumplimiento de esos deberes— a emprender medidas legales, el resto de administradores estarán facultados para hacerlo, aun cuando inicialmente careciesen del poder necesario. Excepcionalmente, el tribunal podrá autorizar a los accionistas a iniciar una acción legal en nombre de la empresa, en relación a una causa de pedir (que, como veremos a continuación, es la fundamentación fáctica o jurídica en la que basa su pretensión) que ostente la compañía pero que se niegue a ejercitar, según a lo previsto en las secciones 260 a 264 de la Companies Act 2006 (r. 19.9, 1(a) CPR y s. 260 (1) Companies Act 2006). A estas reclamaciones se las conoce como «*derivative claims*».

La demanda solo se podrá presentar en relación a una causa de pedir que se origine de un acto u omisión, culposo o doloso, de un administrador de la compañía, en incumplimiento sus deberes (s. 260 (3) Companies Act 2006). El procedimiento a seguir será similar al del resto de demandas con algunas particularidades específicamente recogidas en la Reglas 19.9A a 19.9F CPR. La sociedad participará en el procedimiento en calidad de co-demandada de manera que, dictada la resolución judicial, quede vinculada por ella, pueda ejecutarla y recibir así las ganancias (si las hubiera) de una condena a su favor (rr. 19.9 (2) y 19.9 (3) CPR)⁸⁰.

5.2. La representación de las partes en el proceso

I. En Inglaterra y Gales, las personas que tengan capacidad suficiente y no hayan sido inhabilitadas —conforme a expuesto en el apartado anterior— podrán representarse a sí mismas ante un tribunal. Cuando una de las partes no pueda hacer frente a los honorarios de los representantes legales y no cumpla con los requisitos para beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita, —tema del que nos ocuparemos en el Capítulo IV— o si prefiere intervenir en el proceso directamente, existe la posibilidad de que la parte se represente a sí misma y se le denominará *litigant-in-person*.

El *litigant-in-person* podrá ser cualquier persona con capacidad suficiente y deberá hacer frente a un procedimiento regulado cuya complejidad podría privar a la parte de una defensa adecuada. Para tratar de paliar este inconveniente, el *litigant-in-person* dispone de guías para actuar en el proceso. Recientemente, miembros de la judicatura han publicado un manual en el que se abordan las diferentes etapas del procedimiento civil inglés⁸¹, al igual que la guía explicativa del Bar Council, sobre las principales características y particularidades del sistema procesal civil⁸². También, el *Supreme Court* ha publicado una guía que resulta de especial ayuda para los procedimientos que se incoen ante este órgano⁸³.

Además, el *litigant-in-person* podrá servirse de un tercero que le ayude durante su defensa ante el tribunal, al que se le conoce como «*Mckenzie friend*». Las notas características y requisitos fundamentales de estos terceros se desarrollan detenidamente en el Capítulo X.

II. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, la parte preferirá contar con un profesional jurídico para la representación y dirección del litigio. Cuando los *solicitors* y *barristers* estén representando a un cliente, ambos deberán colaborar de manera independiente en interés de la justicia (s. 188(2) The Legal Services Act 2007). De la necesaria atención al interés de la justicia se deduce la prohibición de que los *solicitors* y/o *barristers*, en el ejercicio de sus funciones, engañen o induzcan a error al tribunal (O.5.1 SRA Code of Conduct 2011 y p. 302 Code of Conduct of the Bar of England and Wales).

5.3. La legitimación

I. Cuando un sujeto tiene capacidad podrá intervenir en el proceso en calidad de parte pero no todas las personas con capacidad *deben* actuar como parte. Como regla general, solo podrán ser partes en el proceso, las personas con capacidad que sean titulares de un derecho que merezca la pena ser enjuiciado. En caso contrario, el tribunal, de oficio o a instancia de una de las partes, podrá desestimar y archivar todo o parte del procedimiento (r. 3.4(2) CPR y PD 3A.1.6). Por consiguiente, el escrito de demanda o de contestación deberá revelar razones o motivos suficientes que justifiquen su interposición y posterior enjuiciamiento. De esta forma, es necesario que las partes, además, de estar capacitadas estén «legitimadas», tanto para demandar como para ser demandadas. La **legitimación** podrá ser directa, cuando la parte ostenta la titularidad del derecho o el interés objeto de la disputa; o indirecta, en aquellos supuestos en que se concede la titularidad de la acción a un sujeto que no es el titular del derecho o interés, a través de la sustitución o de la representación.

II. En efecto, en ocasiones, el tribunal podrá ordenar que un tercero **sustituya** a una parte originaria cuando lo entienda conveniente en aras a poder resolver el litigio de la forma más adecuada posible (r. 19.2(4) CPR). Esto sucede cuando, por ejemplo, el interés o derecho de un sujeto que, en principio, debería ser parte ha sido traspasado a un tercero. En ese caso,

⁸¹ BAILEY, E., ET ALI., *A Handbook for Litigants in Person*, 2013, disponible en formato electrónico en: http://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/CO/Documents/Guidance/A_Handbook_for_Litigants_in_Person.pdf

⁸² THE BAR COUNCIL, «A guide to Representing yourself in Court», disponible en formato electrónico en: <http://www.barcouncil.org.uk/instructing-a-barrister/representing-yourself-in-court/>.

⁸³ THE SUPREME COURT, «A Guide to proceedings in the Supreme Court for those without a legal representative», 2014, disponible en formato electrónico en: <http://supremecourt.uk/docs/guide-to-proceedings-for-those-without-a-legal-representative.pdf>.

ha de solicitar una tutela judicial en relación a un derecho ajeno por interés propio o de un interés del que ha devenido titular.

Por el contrario, en la **representación** quien ejerce la acción no lo hará necesariamente en interés propio ni por un derecho propio. Así, en ocasiones no será posible que todas las partes interesadas en el litigio puedan formar parte del mismo. En esos casos, el tribunal podrá nombrar a un representante para las personas (físicas o jurídicas) que no hubieran sido parte en el proceso. La representación está regulada, en el CPR, en su Regla 19.6 y 19.7 y clasificada en dos supuestos: (i) la representación en cualquier tipo de procedimiento de una persona por un representante que también tiene un interés en la reclamación (r. 19.6 CPR); y (ii) la representación en determinados litigios cuando el representado no pueda ser identificado (r. 19.7 CPR).

La Regla 19.6 regula la representación en todo tipo de litigios, salvo los comprendidos específicamente en la Regla 19.7. En los procedimientos recogidos en la Regla 19.6, el CPR requiere para poder proceder con la representación que el representante tenga el mismo interés que el representado. De esta forma, cuando dos o más partes tengan el mismo interés en un proceso podrá comenzar el procedimiento (o el tribunal podrá acordar su continuación) en nombre de (o frente a) una o más de esas personas que compartan el interés común en calidad de representantes de cualquier otra persona que tenga ese interés (r. 19.6(1) CPR). El tribunal, *ex officio* o a solicitud de cualquiera de las partes, podrá impedir a una persona que actúe como representante (rr. 19.6(2) y 19.6 (3) CPR). Salvo decisión del tribunal en sentido contrario, cualquier resolución dictada en un procedimiento en que una parte esté actuando como representante será vinculante a todos los representados (r. 19.6 (4)(a) CPR). Sin embargo, será necesaria la autorización del tribunal para ejecutar la resolución frente a las personas que no actuaron formalmente como parte (r. 19.6 (4)(b) CPR).

En cambio la Regla 19.7 CPR, regula la representación exclusivamente para los supuestos en que el objeto de la disputa sea: la herencia de una persona fallecida, la propiedad sujeta a un *trust* o el significado de un documento. El tribunal podrá nombrar a un representante cuando el representado sea un *nasciturus* (el concebido aún no nacido), no pueda ser encontrado o no pueda ser fácilmente identificado. Al igual que ocurre con la representación regulada por la Regla 19.6 CPR, el tribunal podrá nombrar a un representante cuando se trate de un grupo de personas con el mismo interés; no obstante, la Regla 19.7 limita tal posibilidad a que: (i) una (o varias) de las personas del grupo se encuentre dentro de alguna de las categorías descritas, o (ii) cuando el nombramiento del representante se dirija a fomentar el *overriding objective* (r. 19.7(2) CPR).

La solicitud podrá presentarse en cualquier momento del proceso por alguna de las partes o por aquél que pretendiese ser nombrado representante (r. 19.7(3) CPR). La solicitud deberá notificarse a todas las partes del proceso, a la persona que pretenda actuar como representante cuando no coincida con el solicitante y a aquellas otras personas que el tribunal entienda necesario (r. 19.7(4) CPR). Cuando el representante quisiera alcanzar un acuerdo transaccional, será necesario el permiso del tribunal (r. 19.7(5) CPR), que deberá comprobar que sus términos son beneficiosos para el representado (r. 19.7(6) CPR). La resolución que dicte el tribunal, salvo que disponga expresamente lo contrario, será vinculante a todos los representados (r. 19.7 (7)(a) CPR). Sin embargo, será necesaria la autorización del tribunal para ejecutar la resolución frente a los sujetos que no actuaron formalmente en calidad de parte (r. 19.7 (7)(b) CPR).

5.4. La pluralidad de partes y los terceros en el proceso

I. La parte 19 CPR regula las situaciones en que se pretenda la entrada o sustitución de una parte en el proceso, permitiendo que en una única reclamación se puedan incorporar varios demandantes o demandados. Existen dos posibilidades de intervención en el proceso cuando hay una pluralidad de partes: (i) la posibilidad de que uno o varios demandantes utilicen un único escrito de demanda para demandar a uno o varios demandados, denominado *joinder of parties* o litisconsorcio (activo en caso de varios demandantes o pasivo de ser varios los demandados) y (ii) la intervención los terceros en aquellas situaciones en que su participación devenga necesaria a raíz de su llamamiento a formar parte del proceso.

II. El ordenamiento inglés recoge la posibilidad del *joinder of parties*, por el que varios sujetos se reúnen en un único proceso y en una misma posición procesal. El **litisconsorcio** podrá ser **voluntario**, cuando depende de la voluntad de las partes; o **necesario**, si la pluralidad de partes responde a un deber recogido legalmente. En este sentido, por ejemplo, la Regla 19.3 CPR, dispone que cuando un demandante esté solicitando una tutela judicial a la que también tenga derecho otra persona, todas las personas co-titulares del derecho que pudiera dar origen a la tutela solicitada deberán ser partes, salvo que el tribunal disponga lo contrario (r. 19.3(1) CPR). Si una persona no aceptara ser demandante deberá actuar como demandado (r. 19.3(2) CPR).

El CPR fija ciertas limitaciones o restricciones a la posibilidad de que una única demanda sea utilizada por uno o varios demandantes para interponer una acción frente a uno o varios demandados. El litisconsorcio será únicamente posible si se trata de reclamaciones que se puedan resolver en un mismo procedimiento (r. 7.3 CPR)⁸⁴. Cuando sean varios los demandados, cada demandado podrá tener su propia representación legal, al igual que podrán notificar sus demandas por separado. De hecho, cada demandado podrá presentar su demanda con base en el relato fáctico y la fundamentación jurídica que entienda que mejor se acomoda a sus respectivas defensas, frente a las causas de pedir que indistintamente pretenda hacer valer el demandante. En Sala, cada demandado podrá igualmente estar representado por su propio letrado y *solicitor*⁸⁵. Por el contrario, si la demanda se interpone en nombre de dos o más demandantes, éstos deberán actuar conjuntamente durante todo el procedimiento, incluido el acto del juicio, salvo que el tribunal disponga lo contrario⁸⁶.

III. Por otro lado, cuando se pretenda la incorporación de un **tercero** en calidad de parte, el tribunal deberá valorar las circunstancias del caso para decidir si permite su llamamiento e intervención. El CPR concede amplias facultades al tribunal para poder llamar a un tercero cuando su intervención facilite la labor del tribunal, de modo que pueda resolver todos los asuntos controvertidos en un único proceso. Igualmente, el tercero podrá ser llamado al proceso cuando exista un asunto que le afecte y esté en conexión con el objeto principal, que determine la necesidad de su participación como parte en el procedimiento, de manera que el tribunal pueda resolver sobre esa cuestión (r. 19.2(2) CPR).

⁸⁴ De lo contrario, el tribunal podrá decidir que parte de la reclamación se sustancie en un procedimiento por separado o se enjuicie por separado (rr. 3.1 (2)(e) y 3.1 (2)(i) CPR).

⁸⁵ Sin embargo, el tribunal podrá catalogar de desproporcionado el coste de la representación por separado, con diferentes *solicitors* y *barristers*, algo que complica la posible recuperación en el caso de obtener una condena en costas favorable a los co-demandados (*Re Spurling's Will Trust* [1966] 1 WLR 920).

⁸⁶ *Lewis v. Daily Telegraph* (No. 2) [1964] 2 QB 601.

El tribunal también podrá ordenar que una de las partes originarias sea **sustituida** por un tercero en aquellas situaciones en que éste hubiera pasado a ser el titular del derecho (o la obligación) de la parte originaria y sea conveniente su sustitución (r. 19.2(4) CPR). Se deberá acreditar la titularidad de esos derechos presentando los medios probatorios oportunos (r. 19.4(3) CPR).

Por último, el tribunal podrá decidir que cualquiera de las partes **cese** de actuar en el litigio, por considerar que su participación no resulta necesaria para la incoación y resolución del proceso (r. 19.2(3) CPR).

IV. En todo caso, una vez presentada la demanda, es necesaria la **aprobación del tribunal** para cesar, sustituir o añadir a una parte (r. 19.4(1) CPR). La aprobación la podrá solicitar cualquiera de las partes originarias o la persona que aspire a ser parte (r. 19.4(2) CPR). Nadie podrá ser llamado al proceso o sustituido como demandante salvo que preste su consentimiento por escrito y lo presente su consentimiento (r. 19.4(4) CPR).

La orden judicial por la que se acuerde la cesación, llamamiento o sustitución, deberá ser notificada a todas las partes del procedimiento y a cualquier otra persona que pudiera verse afectada (r. 19.4(5) CPR). Del mismo modo, el tribunal podrá facilitar en la resolución judicial ciertas indicaciones sobre la gestión y las modificaciones surgidas en el procedimiento (r. 19.4(6) CPR).

5.5. El fallecimiento de una de las partes

I. El **fallecimiento** de una de las partes no conlleva la extinción automática del proceso. En efecto, la sección 1(1) de la Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act 1934, dispone, como regla general, que la causa de pedir perdurará no obstante el fallecimiento de cualquier persona (demandante o demandado), frente o a favor de su herencia. Sin embargo, la ley excluye expresamente los procedimientos sobre difamación.

Cuando el fallecimiento tenga lugar **antes** de la interposición de la demanda y el demandante hubiera fallecido sin un representante, el tribunal podrá acordar la continuación del proceso en ausencia del representante de la herencia yacente u ordenar que se nombre a una persona que represente a la herencia (r. 19.8(1) CPR). Cuando fuera el demandando el que hubiera fallecido con testamento o habiendo nombrado a un albacea o persona encargada de administrar la herencia, la reclamación se deberá interponer frente a los representantes del fallecido (r. 19.8(2)(a) CPR). Si el fallecido no hubiera nombrado herederos o a un administrador, la demanda se deberá interponer frente a la herencia yacente y el demandante deberá solicitar al tribunal que ordene el nombramiento de una persona que represente la herencia del demandado fallecido (r. 19.8(2)(b) CPR). En todo caso, el tribunal antes de dictar una resolución podrá notificar la solicitud a cualquier persona con interés suficiente en el caso (r. 19.8(4) CPR). La resolución que dicte el tribunal será vinculante a la herencia yacente.

II. Por el contrario, cuando el fallecimiento se hubiese producido **después** de la interposición de la demanda, se podrá solicitar al tribunal que, a falta de una persona que actúe en representación del demandado o demandante fallecido, nombre a un representante de la herencia yacente u ordene la continuación del litigio (r. 19.2(4) CPR).

6. EL OBJETO DEL PROCESO CIVIL

6.1. Los sujetos

I. El primer elemento que determina el objeto del proceso son los sujetos que intervienen en el procedimiento. Tanto el demandante como el demandado tienen la obligación

de **identificar** a los sujetos en sus escritos de demanda y contestación. La PD 7A.4.1 dispone que, la demanda y cualquier otro *statement of case*, deberá contener en su encabezamiento el número de autos, el tribunal al que se dirige el escrito y una identificación del resto de partes involucradas en el proceso. Para ello, se deberá especificar el nombre completo y el estatus (demandante o demandado) de la contraparte. La PD 16.2.6 desarrolla esta norma para cada tipo de personas (jurídicas o físicas) que pueden ser parte del proceso.

II. Cuando se **desconozca la identidad** de la parte que hubiera provocado el conflicto y frente a quien se estuviera litigando, el demandante podrá utilizar una descripción en lugar de un nombre, o demandar bajo el título de «Persona Desconocida», siempre y cuando la descripción facilite la identificación del demandado. Este mecanismo resulta especialmente útil para los casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual, en los que el demandante, habitualmente, desconoce la identidad del infractor.

6.2. El *petitum*

I. En segundo término, el objeto del procedimiento lo determina el **demandante** al indicar la tutela jurídica que solicita. Las partes establecen sus posturas en los denominados «*statements of case*», que son todos los documentos que reflejan la posición de los litigantes durante el proceso y se identifican las cuestiones de Hecho y de Derecho (rr. 2.3(1) y 16 CPR). El demandante deberá señalar la tutela jurídica que solicita, que podrá ser (i) declarativa, (ii) constitutiva y/o (iii) de condena. Así, la Regla 16.2 CPR señala que la demanda deberá «especificar la tutela que pretende el demandante». Sin embargo, no se limita la función del tribunal, que podrá reconocer o conceder al demandante una tutela a la que éste está legitimado aun cuando no la hubiera solicitado expresamente en el escrito de demanda (r. 16.2(5) CPR).

II. En todo caso, es importante que el demandante identifique de **forma inteligible y manifiesta** la tutela judicial que pretende al interponer su demanda. De lo contrario, el demandado podrá solicitar al demandante que le aclare los puntos oscuros de su demanda y estará obligado a proporcionar la información suficiente a este respecto (r. 18 CPR). De no conseguir esclarecer y aclarar lo solicitado por el demandante, dado que se trata de una demanda defectuosa cuyo vicio no ha podido superarse, el demandado podrá solicitar al tribunal que proceda a su desestimación, al considerarla como una obstrucción a la justa resolución del asunto en cuestión (r. 3.4 CPR)⁸⁷.

6.3. La causa de pedir

I. El tercer elemento que identifica el objeto del proceso es la causa de pedir. Para interponer una demanda es preciso que el demandante tenga una causa de pedir reconocida en Derecho frente al demandado. El demandante deberá presentar el relato fáctico sobre el que fundamenta su reclamación. La estructura de la demanda se puede dividir en tres elementos: (i) el deber del demandante frente al demandado, (ii) el incumplimiento de ese deber por el demandado, y (iii) los daños que el demandante podrá recuperar en Derecho por los perjuicios que el incumplimiento le haya causado. El demandante deberá demostrar que concurren todos ellos⁸⁸.

⁸⁷ *Towler v. Wills* [2010] EWHC 1209 (Comm).

⁸⁸ BAILEY, E., *ET AL.*, *A handbook for Litigants in Person*, op. cit., pág. 24.

objeto litigioso en cada proceso pero cabe que existan procesos con pluralidad de objetos en los que se intenten que se tramiten conjuntamente y se resuelvan en una única resolución. El CPR regula los supuestos de acumulación de acciones y de acumulación de procedimientos.

La **acumulación de acciones** se regula en la Regla 7.3 CPR, a cuyo tenor, el demandante podrá utilizar un único escrito de demanda para comenzar todas las reclamaciones que pudieran ser convenientemente resueltas en el mismo procedimiento. El demandante tiene la posibilidad de acumular inicialmente cuantas acciones entienda necesarias, frente a uno o varios demandados. Y deberá tener en cuenta, de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 19.1 CPR, que se podrán unir en una misma reclamación varios demandantes y varios demandados⁹³.

La acumulación de distintas acciones en una única demanda no necesita de la autorización del tribunal. Sin embargo, la libertad del demandante está limitada por el **test de conveniencia**, dado que, exclusivamente, se podrán acumular «las reclamaciones que pudieran ser convenientemente resueltas en el mismo procedimiento» (r. 7.3 CPR). Si el tribunal entiende que alguna de las reclamaciones incluidas dentro del escrito de demanda no deben enjuiciarse en el mismo procedimiento, ordenará, de oficio, su tramitación por separado (r. 3.1(2) CPR).

II. Por otro lado, los poderes del tribunal sobre la gestión y disposición del procedimiento le facultan para **acumular procedimientos** (r. 3.1 (2)(g) CPR). El fundamento de la acumulación de procesos es, por una parte, alcanzar una economía procesal y evitar una multiplicidad de procesos judiciales que redundaría en un aumento de costas y tiempo; y, por otra y sobre todo, en conseguir la seguridad jurídica evitando resoluciones contradictorias.

El CPR no proporciona ninguna guía o directriz sobre cuáles son los procesos que deben acumularse, si bien, en general, las ocasiones que permiten la acumulación son las mismas que permiten agrupar a diferentes partes en un mismo procedimiento. Sin embargo, ello no significa que la acumulación de procedimientos se deba llevar a efecto en todas esas situaciones, sino que deberá probarse su necesidad en aras a la justicia y en aplicación del *overriding objective*.

La acumulación de procedimientos, al contrario que la acumulación de acciones, no se podrá acordar a instancia de parte, sino que se necesita de una decisión judicial a este respecto. Las partes podrán presentar su solicitud siguiendo el procedimiento previsto en la Parte 23 CPR y el tribunal podrá acordar que su tramitación continúe por separado cuando, por ejemplo, el interés de todos los demandantes no sea el mismo, lo que hará más conveniente, sin duda, su tramitación por separado⁹⁴.

El demandado podrá impugnar cualquiera de los tres elementos mencionados, al argumentar que la reclamación del demandante no está reconocida en Derecho o que los hechos expuestos no dan lugar a su pretensión. De esta forma, la disputa entre las partes podrá versar sobre cuestiones de Hecho o de Derecho o ambas porque la causa de pedir comprende la **fundamentación fáctica y jurídica** de que se sirven las partes para formular sus peticiones.

Por cuestiones de Hecho se entiende aquella parte del relato fáctico en que discrepan las partes y sobre la que recaerá la prueba. El tribunal, en una vista (*Case Management Conference*), podrá indicar a las partes sobre cuáles son los hechos esenciales de la controversia, de manera que la disputa se centre en las cuestiones verdaderamente relevantes. Por el contrario, una cuestión de Derecho se reduce a aquellas ocasiones en que las partes del proceso discrepan sobre un aspecto jurídico concreto o sobre la aplicación de una norma o principio legal en relación con el procedimiento. Sin embargo, no siempre es necesario que concurren los dos elementos, fáctico y jurídico; en ocasiones, por ejemplo, la disputa versará exclusivamente sobre una cuestión de Hecho o de Derecho⁸⁹.

II. Por último, el demandante en los *statements of case* deberá invocar cuantos fundamentos estime precisos, pues en el juicio no podrá desviarse de lo alegado en ellos y, si así lo hiciera, no se tendrán en consideración a la hora de dictar sentencia⁹⁰. En el sistema inglés opera la regla de la **preclusión** en relación a las alegaciones sobre las que una parte intenta basar su postura⁹¹. De igual modo, queda excluida la posibilidad de que una parte fundamente su pretensión en alegaciones o medios probatorios de los que dispuso o pudo haber dispuesto en una solicitud conexa anterior pero que, por la razón que fuese, el solicitante (o su representante legal) decidió no utilizar.

No obstante, debemos advertir que en el proceso inglés se permiten las modificaciones de los *statements of case*. Al hilo de lo anterior, merece especial mención el caso *Cobbold c. LB Greenwich*, donde Gibson LJ determinó que: «Las modificaciones en general deben permitirse, para que la verdadera disputa entre las partes se pueda enjuiciar, siempre y cuando cualquier perjuicio que se produzca a la otra parte provocado por la modificación pueda compensarse en materia de costas, y que no se perjudique considerablemente el interés público en la administración de justicia»⁹².

7. LOS PROCESOS CON PLURALIDAD DE OBJETOS. LA ACUMULACIÓN DE ACCIONES Y DE PROCEDIMIENTOS

I. La sección 49(2) de la Senior Courts Act 1981 dispone que el tribunal deberá ejercer su poder discrecional para asegurarse, en la medida de lo posible, que todos los asuntos contrarios entre las partes se resuelvan definitivamente, evitando así la multiplicidad y reiteración de procedimientos judiciales. Como hemos señalado, lo habitual es que se discuta un solo

⁸⁹ Especialmente ilustrativo resulta el caso en el que el demandante es un peatón que demanda a un conductor por haber sido atropellado cuando cruzaba la calle mientras el semáforo estaba en rojo para los vehículos. En ese caso, la decisión del tribunal dependerá probablemente en exclusiva sobre una cuestión de Hecho. En cualquier caso, el demandante, antes de proceder a la interposición de la demanda, deberá comprobar que su reclamación está amparada en Derecho.

⁹⁰ *Lipkin Gorman c. Karpanale Ltd* [1989] 1 WLR 1340.

⁹¹ *Bradford and Bingley Building Society* [1999] 1 WLR 1482.

⁹² *Cobbold c. LB Greenwich* [1999] EWCA Civ 2074.

⁹³ KAY, M., *Blackstone's Civil Practice* 2014. *The Commentary*, op. cit., pág. 230.

⁹⁴ *Lewis c. Daily Telegraph* (No. 2) [1964] 2 QB 601.

CAPÍTULO V

EL INICIO DEL PROCESO: LA DEMANDA

1. LAS ACTUACIONES PREVIAS AL PROCESO

I. En la mayoría de las ocasiones, los tribunales esperan que las partes se hayan informado sobre las alegaciones que realizarían cada una de ellas en caso de iniciar el litigio; todo ello, con el objetivo de que las partes puedan, una vez informadas, llegar a un acuerdo que evite la disputa. De esta forma, en la mayoría de los casos, como antesala al inicio de un procedimiento, las partes deben cumplir con ciertas actuaciones anteriores al inicio del proceso, «*pre-action protocols*», consistentes en un intercambio de comunicaciones y documentación sobre el conflicto, para intentar alcanzar a un acuerdo²⁴⁰. Los *pre-action protocols* se consideran como uno de los elementos esenciales para poder alcanzar una justicia de forma rápida y eficaz; objetivo primordial en la reforma de Lord Woolf²⁴¹. Estas actuaciones han sido publicadas por el Ministerio de Justicia²⁴².

II. En aquellos casos en que no exista un *pre-action protocol* concreto para el asunto en particular el tribunal espera que, en cualquier caso y en aplicación del *overriding objective*, se produzca el mencionado intercambio de documentos e información. En caso de no cumplir con la referida obligación, el tribunal está facultado para imponer sanciones (r. 3.1 CPR).

2. LOS STATEMENTS OF CASE

I. Los «*statements of case*»²⁴³ son todos aquellos **documentos que reflejan la posición de los litigantes** durante el proceso y donde se identificarán las cuestiones (de Hecho o de Derecho) esenciales de la controversia. Son *statements of case*: el escrito de demanda, los *par-*

²⁴⁰ En consecuencia, los *pre-action protocols* son una manera clara de fomentar los acuerdos para evitar el litigio. Cf. HOPKES, C., «*The reform of class and representative actions in European Legal systems*», Hart Publishing, 2008, pág. 54.

²⁴¹ M GERLIS, S. & BACKROD, R., *The Civil Practitioner's Handbook 2002/2003*, Sweet & Maxwell, Londres 2002, pág. 24.

²⁴² El Ministerio de Justicia ha publicado hasta 12 *pre-actions protocols*, dependiendo de la materia.

²⁴³ Antes de la entrada en vigor del nuevo CPR se les denomina «*pleadings*».

particulars of claim (siempre que estén separados de la demanda), la contestación a la demanda, la *Part 20 claim*, la réplica, y cualquier información adicional sobre los mismos (r. 2.3(1) CPR).

A través estos documentos se darán a conocer detalladamente al resto de partes involucradas en el proceso las pretensiones y fundamentación en que se basa la contraparte. Igualmente, permitirá al juzgador identificar cuáles son las cuestiones sobre las que deberá resolver al final del procedimiento.

II. Es importante presentar correctamente el caso en estos documentos, dado que en el juicio la parte no podrá desviarse de lo alegado en ellos²⁴⁴. En este sentido, en el sistema inglés opera la **preclusión** en relación a las alegaciones sobre las que una parte intenta basar su postura. De este modo, las alegaciones que no se hayan incluido en los *statements of case* no se tendrán en consideración durante el juicio por lo que, tampoco, a la hora de dictar sentencia, al igual que no se podrán alegar en sede de apelación²⁴⁵.

III. El contenido de todos los documentos que formen los *statements of case* debe estar verificado mediante un *statement of truth*, que consiste en una declaración jurada o de veracidad (r. 22.1 (1)(a) CPR), por la que la parte que ha redactado el documento declara que la información recogida en el *statement of case* es cierta y fidedigna. Esta declaración deberá estar firmada por el litigante y, cuando fuera incapaz, por su *solicitor* o *litigant's friend* (r. 22.1(6) CPR). De demostrarse que la persona otorgó una declaración jurada o de veracidad (*statement of truth*) sin que tuviera la «creencia sincera» sobre su veracidad, podrá ser condenada por un delito de desacato al tribunal (r. 32.14(1) CPR). De esta forma, cuando una de las partes advierta que cierta información incluida en el documento de la otra parte falta a la verdad, podrá solicitar al tribunal que le imponga la pena de desacato, pero deberá demostrar: (i) que conocía que esa información era falsa y (ii) que esa información, posiblemente, podía interferir en el desarrollo de las actuaciones. Antes de presentar la citada solicitud y una vez conseguidas las pruebas, se debe dar un aviso de advertencia al litigante contrario²⁴⁶.

IV. Conforme a lo dispuesto en la Parte 18 CPR, si una de las partes considerara insuficiente o poco clara la información que el otro litigante ha facilitado en sus *statements of case* podrá solicitar más información a este respecto, a través de una petición o solicitud por escrito. Si se niega a contestar, podrá solicitar una orden judicial que le obligue a ello en un tiempo determinado. Conforme al *overriding objective* y la PD 18, dicha petición tendrá que ser razonablemente necesaria y, en cualquier caso, proporcionada.

3. LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA

3.1. Contenido y forma de la demanda

I. Una vez presentado el escrito de demanda («*bring a claim*»), la forma de iniciar el procedimiento es solicitar al tribunal que proceda a su admisión, momento en el que se entenderá efectivamente interpuesta la demanda («*issue a claim*»), conforme a lo regulado en la Parte 7 del CPR, aunque debemos advertir que existen otras posibilidades. Al presentar la demanda es necesario proceder al pago de una tasa, calculada con base en la cuantía de la reclamación y al conjunto de intereses devengados. En términos generales, el escrito de demanda debe

²⁴⁴ No obstante, como veremos, a continuación, la parte podrá solicitar al tribunal que le permita modificar alguno de los aspectos contenidos en los *statements of case*.

²⁴⁵ *Lipton Gorman c. Karpnale Ltd* [1989] 1 WLR 1340.

²⁴⁶ *Malgar Ltd c. R.E. Leach (engineering) Ltd* [2000] FSR 393.

ser notificado en los 4 meses siguientes a su presentación. El demandante podrá solicitar la ampliación del citado plazo, dentro del periodo de 4 meses o, en determinadas ocasiones, con posterioridad (rr. 7.5 y 7.6 CPR).

II. La **preparación del escrito** de demanda es responsabilidad del *solicitor* del demandante. Para la mayoría de los procedimientos, existe un modelo, el N1, aunque existen hasta 15 modelos diferentes dependiendo del procedimiento (a modo ilustrativo: el N1(CC), para los tribunales de lo mercantil, o el N5, N5A y N5B en reclamaciones de posesión («*possession claims*») etc.)²⁴⁷. Igualmente el escrito de demanda debe contener:

- El tribunal al que se dirige
- Los nombres y direcciones de las partes
- Un resumen de la naturaleza de la reclamación, dado que las alegaciones específicas se abordarán en los denominados «*particulars of claim*»²⁴⁸
- La fijación de la tutela judicial que se solicita²⁴⁸
- Determinar la cantidad reclamada (si es posible)²⁴⁹

Las demandas de cuantía indeterminada que se presenten en el *High Court* deben acompañarse con alguno de los siguientes documentos:

- Una declaración del demandante en la que afirme que espera recuperar una cuantía superior a las 100.000 libras esterlinas²⁵⁰.
- Una confirmación de que, conforme a una norma en particular, la demanda debiera comenzar en el *High Court* exclusivamente.
- Una confirmación de que debe conocer de la demanda uno de los tribunales especiales del *High Court*.

3.2. Escrito de pretensiones o pormenorización de la demanda: *particulars of claim*

I. Desde la reforma procesal civil de 1998, al impreso de demanda le acompañan los *particulars of claim* (r. 7.4(1) CPR), en los que el demandante manifestará el objeto y la naturaleza de la misma, fijará la causa de pedir y sus pretensiones, es decir, la tutela judicial o «*remedy*» que pretende, al tiempo que expondrá los hechos y las pruebas necesarias en que sustente los mismos²⁵¹, haciendo referencia a los fundamentos de Derecho que le sirvan de base. No obstante, los *particulars of claim* (aun cuando es lo deseable) no tienen que incorporarse necesariamente al escrito de demanda, sino que se podrán presentar en un documento aparte (r. 7.4 CPR). Así, el demandante debe informar en el escrito de demanda si los adjunta al mismo documento o si se trata de un escrito que se presentará en otro momento posterior.

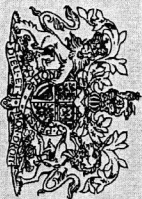
²⁴⁷ Si una parte interpone el modelo incorrecto, lo más probable es que le permitan subsanar el error, dado que se considera un defecto formal que no vicia al resto del procedimiento salvo si ha supuesto una injusticia sustancial e irremediable.

²⁴⁸ En todo caso, el tribunal podrá conceder cualquier tutela judicial a la que esté legitimado el demandante, aun cuando no la haya solicitado expresamente en el escrito de demanda (r. 16.2(5) CPR).

²⁴⁹ Esto último es relevante a los efectos de determinar la vía procesal («*track allocations*»), como estudiaremos, *infra* Capítulo VII.

²⁵⁰ En el caso de los daños personales, la cuantía asciende a más de 50.000 libras esterlinas.

²⁵¹ Por ejemplo, si la reclamación del demandante se basa en un incumplimiento contractual, deberá acompañar a los *particulars of claim* el contrato, además de poner a disposición del tribunal en el acto de la vista el documento original (PD 16, 7.3 (1)).



Claim Form

In the	
Fee Account no.	
Claim no.	For court use only
Issue date	

You may be able to issue your claim online which may save time and money.
Go to www.moneyclaim.gov.uk to find out more.

Claimant(s) name(s) and address(es) including postcode



Defendant(s) name and address(es) including postcode

Brief details of claim

Value

You must indicate your preferred County Court Hearing Centre for hearings here (see notes for guidance)

Defendant's name and address for service including postcode

Amount claimed	
Court fee	
Legal representatives costs	
Total amount	

For further details of the courts www.gov.uk/find-court-tribunal.
When corresponding with the Court, please address forms or letters to the Manager and always quote the claim number.
NI Claim Form (CPR Part 7) (05.14)

Claim No.	
-----------	--

Does, or will, your claim include any issues under the Human Rights Act 1998? ☐ Yes ☐ No
Particulars of Claim (attached)(to follow)

Statement of Truth
*(I believe)(The Claimant believes) that the facts stated in these particulars of claim are true.
* I am duly authorised by the claimant to sign this statement

Full name _____
Name of claimant's legal representative's firm _____
signed _____ position or office held _____
*(Claimant)(litigation friend) (if signing on behalf of firm or company)
(Claimant's legal representative) *delete as appropriate

Claimant's or claimant's legal representative's address to which documents or payments should be sent if different from overleaf including (if appropriate) details of DX, fax or e-mail.

II. Si finalmente presenta los *particular of claim* en un documento independiente del escrito de demanda, se deberán notificar al demandado dentro de los 14 días siguientes de la notificación de la demanda y, en cualquier caso, en el plazo establecido (r. 7.4(2) CPR)²⁵².

3.3. Interposición de la demanda

I. El *solicitor* del demandante al presentar el escrito de demanda debe proporcionar tantas copias como partes haya en el litigio. De esta forma, el demandante se queda con una copia y manda el resto a la oficina judicial, junto con la tasa correspondiente, mediante carta, en la que solicitará que el tribunal proceda a la emisión de la demanda o, en otras palabras, que admita su **efectiva interposición** (*issue*). Alternativamente, el *solicitor* del demandante puede acudir en persona a la oficina judicial para comprobar que se admite la demanda, algo que, en la práctica, es muy recomendable.

Si los documentos se envían por correo, la oficina judicial sella la carta una vez la recibe. De este modo, el plazo de prescripción se interrumpe cuando se presenta la demanda y el demandante solicita al tribunal la emisión de la demanda²⁵³.

A los efectos del CPR, el procedimiento da comienzo una vez se haya procedido a la efectiva interposición de la demanda (r. 7.2(1) CPR). Una vez interpuesta, el tribunal asignará un número de autos al procedimiento y notificará al demandante su efectiva interposición.

II. Las reclamaciones monetarias con un valor hasta 100.000 libras esterlinas, cuando ninguna de las partes sea un menor o una parte protegida y en determinadas condiciones fijadas en la *Practice Direction 7E*, podrán presentarse electrónicamente²⁵⁴. Su efectiva interposición se solicitará ante el Northampton County Court, al presentar una reclamación electrónica y pagar electrónicamente la tasa correspondiente. En este tipo de demandas, los *particulars of claim* no deben incorporarse a la demanda si exceden de los 1.080 caracteres. La notificación de este tipo de reclamaciones se realiza por el propio tribunal y el demandado podrá contestar electrónicamente o en soporte físico.

4. LA MODIFICACIÓN DE LOS STATEMENTS OF CASE

I. Conforme a la Parte 17 CPR, en determinadas ocasiones, las partes podrán modificar el contenido de sus *statement of case*, esto es, la demanda, los *particulars of claim*, la contestación, la réplica, las demandas de la Parte 20 y cualesquiera otros documentos en relación a todas ellas. La modificación se podrá llevar a cabo en cualquier momento con anterioridad a su notificación, no así una vez se haya practicado, en cuyo caso estará sujeta a ciertas limitaciones. De esta forma, cuando se pretenda realizar cualquier cambio en los *statement of case* **con anterioridad a la práctica de la notificación**, se podrá realizar sin la autorización del tribunal. De cualquier modo, aun en caso de no ser necesaria la aprobación del tribunal, éste tiene la facultad de rechazar la modificación. Las partes podrán asimismo solicitar su anulación en el plazo de 14 días desde la práctica de la notificación del *statement of case* modificado (r. 17.2 CPR).

²⁵² En los *Commercial Courts*, los *particular of claim* pueden notificarse en 28 días.

²⁵³ Conforme a lo expuesto, en *Barnes v. St. Helens Metropolitan Borough Council* [2006] EWCA Civ 1372, la fecha relevante a los efectos de la prescripción es el día en que se presenta la demanda, en lugar de cuando el tribunal entienda que está efectivamente interpuesta.

²⁵⁴ En la página web: www.moneyclaim.gov.uk.

II. Una vez practicada la notificación, requerirá del consentimiento por escrito del resto de partes involucradas en el proceso o de la aprobación del tribunal. La solicitud deberá contener una copia de los *statements of case* con las modificaciones que se pretenden (PD 17, 1.2). En principio no será necesario señalar las modificaciones incorporadas sino, simplemente, presentar el nuevo documento. Sin embargo, si así lo indicase el tribunal, el documento deberá identificar los fragmentos que se hayan alterado, por ejemplo, utilizando diferentes colores o un sistema numérico (PD 17.2).

Cuando se requiera la modificación avanzado el proceso, se podrá solicitar al juez encargado del juicio; en caso contrario, conocerá de la solicitud el *district judge* o el *master*, como parte de sus funciones de gestión del procedimiento. El juez, para decidir si permite o no la modificación, debe asegurarse que no causa ninguna injusticia al resto de partes del procedimiento. Con esta finalidad, el juez, en general, permitirá la modificación teniendo siempre en consideración el *overriding objective*.

En la práctica habitual en los tribunales ingleses se permite cualquier modificación salvo cuando se considere que la parte actúa de mala fe, o cuando el error que se quisiese modificar causase cualquier perjuicio a la contraparte que no pudiese compensarse mediante un pronunciamiento condenatorio en costas o de cualquier otra forma²⁵⁵. Mención especial merece el caso *Cobbold v. LB Greenwich*, donde Gibson LJ determinó que: «Las modificaciones en general deben permitirse, para que la verdadera disputa entre las partes se pueda enjuiciar, siempre y cuando cualquier perjuicio que se produzca a la otra parte provocado por la modificación pueda compensarse en materia de costas, y que no se perjudique considerablemente el interés público en la administración de justicia»²⁵⁶.

El tribunal tendrá también en consideración el momento en el que se intenta realizar la modificación. Si el juez considera que se ha intentado «tarde», en ocasiones, no lo permitirá, aunque hemos constatado que la casuística es bastante amplia²⁵⁷. Igualmente, cuando el tribunal permita la modificación, podrá condenar a las costas, aun cuando la parte resultase victoriosa. El concepto «tarde», en la práctica de los tribunales ingleses, es ciertamente amplio. La decisión que tome el tribunal tendrá que estar sustentada en el *overriding objective*, por lo que la jurisprudencia varía dependiendo del caso.

IV. Toda modificación que se pretenda para interponer una nueva causa de pedir o añadir una parte a un proceso ya comenzado, se entiende como una acción autónoma y que debería haber comenzado al mismo tiempo que la acción originaria, a los efectos del plazo de prescripción (s. 35 LA 1980). Por consiguiente, cuando se permita la modificación de los *statements of case*, una vez transcurrido el plazo de prescripción previsto en la LA 1980, se le priva al demandando de la posibilidad de alegar la defensa procesal de la limitación extintiva. De esta forma, la regla general consiste en denegar tales modificaciones, salvo en excepciones

²⁵⁵ *Tidley v. Harper* [1878] 10 Ch. D. 393).

²⁵⁶ *Cobbold v. LB Greenwich* [1999] EWCA Civ 2074.

²⁵⁷ En *Woods v. Chateff* [1999] CLY 500, el Tribunal de Apelación no permitió realizar una modificación seis días antes del juicio porque hubiese provocado que una de las partes se encontrase en clara desventaja. Sin embargo, en *Beco Ltd v. Alfa Laval Co Ltd* [1995] QB 137, se permitió al demandante realizar unas modificaciones al 6º día de juicio, dado que, teniendo en consideración las circunstancias del caso, de no haberse permitido, el demandante hubiese sufrido un grave perjuicio. Como contraprestación, el demandante, aunque resultó vencedor, tuvo que hacer frente a una alta condena en costas.

especialmente previstas. Así, cuando hubiera transcurrido el plazo de prescripción se permitirá modificar cualquiera de las partes incluidas en el *statement of case* en la medida en que (i) se limite a corregir el nombre de la parte, cuando existió error (rr. 17.4(3) y 19.5(3) CPR), (ii) el interés o derecho de la parte originaria se haya transferido a otra persona o sea conveniente sustituir a alguna de las partes, de modo que el tribunal pueda resolver el asunto (r. 19.2(4) CPR), (iii) la sustitución o llamamiento de otra parte sea estrictamente necesaria en opinión del tribunal (r. 19.5 (3)(b) CPR), o (iv) en aquellas ocasiones en que se hubiera producido una alteración en la capacidad procesal de alguna de las partes (r. 17.4 CPR).

Por otro lado, la modificación de la causa de pedir una vez transcurrido el plazo de prescripción generalmente es denegada. Para ello se deberá comprobar si la modificación se sustenta en los mismos o idénticos hechos que dieron lugar a la acción originaria.

5. OTRAS FORMAS DE INICIO DEL PROCESO: *PART 8 CLAIM*

I. En la gran mayoría de los casos, la forma normal de iniciar el procedimiento es mediante la interposición del modelo de demanda regulado en la Parte 7 del CPR. No obstante, en determinadas situaciones específicamente previstas, es igualmente posible iniciar el procedimiento presentando una demanda de las incluidas en la Parte 8 del CPR, denominada «*Part 8 Claim*».

El procedimiento está diseñado para aquellas reclamaciones en que la naturaleza de la tutela judicial solicitada o la ausencia de hechos controvertidos hagan innecesario que las partes se sometan al procedimiento desarrollado en la Parte 7 CPR. La Parte 8 CPR regula un proceso más rápido que el previsto para las disputas reguladas en la Parte 7 CPR, sin que sea necesario incluir los *particulars of claim* (rr. 8.9(a)(i) y 16.1 CPR), la contestación a la demanda (rr. 8.9 (a)(ii) y 15.1 CPR) o los *directions* cuestionnaires (dado que las reclamaciones reguladas por la Parte 8 CPR serán asignadas al multi-track: r. 8.9(c) CPR).

La Regla 8.1(2) CPR determina que el procedimiento descrito en la Parte 8 CPR estará disponible en aquellas situaciones en que no exista ninguna controversia sobre el relato de hechos, centrándose la disputa en una mera cuestión de Derecho, que no de Hecho (r. 8.1 (2) (a) CPR), o que lo requiera o permita una Regla o Practice Direction (r. 8.1(6) CPR).

La PD8A, 3.1 recoge algunas situaciones en que *podrá* utilizarse el procedimiento de la Parte 8 CPR, como aquellos casos en que se haya llegado a un acuerdo transaccional sobre una reclamación interpuesta por o frente a un menor o una parte protegida, y el único propósito de la interposición de la demanda sea solicitar al tribunal su aprobación (r. 21.10 (2)(b)(i) CPR). Asimismo, la PD 8A, 9.4 determina las demandas o solicitudes que *deberán* utilizar el proceso regulado en la Parte 8 CPR como, por ejemplo, la solicitud para rectificar cualquier omisión del registro en relación a los contratos de compra venta, conforme a la sección 14 de la *Bills of Sale Act 1878*.

II. El procedimiento presente algunas **diferencias** con respecto a lo ya visto en la Parte 7 CPR. Para interponer la *Part 8 claim* se utiliza el modelo N208 (el N208 (CC) para la *Commercial Court*). Su interposición se asemeja a lo dispuesto para las demandas ordinarias reguladas en la Parte 7 CPR. En el escrito de demanda se debe especificar que resulta de aplicación la Parte 8 CPR, presentar las cuestiones controvertidas sobre los que el demandante pretende que el tribunal se pronuncie, así como su fundamentación jurídica, y si presenta la demanda en calidad de representante deberá especificarlo. Sin embargo, al contrario que en las demandas de la Parte 7 CPR, no será necesario incluir los *particulars of claim*, por lo que la Parte 16 CPR

no resulta de aplicación (r. 8.9 (a)(i) CPR). En su lugar el demandante presentará la prueba que estime necesaria junto con el escrito de demanda (rr. 8.5(1) y 8.5(2) CPR). El plazo para practicar la notificación será igualmente de 4 meses desde que se interpuso la demanda o de 6 meses si se pretende practicar la notificación fuera de la jurisdicción.

El **demandado** contestará presentando un *acknowledgment of service*, utilizando para ello el formulario específicamente previsto para los procesos de la Parte 8 CPR (el N210), que deberá presentar dentro de los 14 días posteriores a la notificación del escrito de demanda (r. 8.3(1) CPR). En el modelo se recogen tres posibilidades: en primer lugar, el demandado podrá elegir no oponerse a la demanda, en cuyo caso deberá seleccionar la Sección A del N210. Cuando efectivamente pretenda plantear una oposición, deberá seleccionar la Sección B y aportar sucintamente cual es la tutela judicial que pretende, distinta que la del demandante. De querer impugnar la jurisdicción del tribunal seleccionará la Sección D y podrá proceder a ello de la misma forma que en las reclamaciones reguladas por la Parte 7 CPR. Por último, cuando no estuviera de acuerdo en que el procedimiento se incoase según lo dispuesto en la Parte 8 CPR, deberá seleccionar la Sección D y argumentar las razones en que basa su objeción (r. 8.8 CPR). Si la demanda se hubiera presentado incorrectamente, a través del procedimiento regulado en la Parte 8, el juez encargado del proceso puede decidir que continúe según lo previsto en la Parte 7.

El **demandante**, al contrario que en los procedimientos regulados por la Parte 7 CPR, no podrá presentar una contestación a la demanda, no siendo aplicable la Parte 15 CPR. En su lugar, podrá presentar los medios probatorios en los que pretenda valerse para defender su postura, que deberá presentar junto con el *acknowledgment of service* (rr. 8.5(3) y 8.5(4) CPR). Por añadidura, en el plazo de 14 días desde su notificación al demandante, éste podrá presentar las pruebas pertinentes que refuten aquellas otras presentadas por el demandado (r. 8.5(5) CPR).

III. El tribunal procederá automáticamente a la **asignación del asunto a una vía procesal** concreta: la *multi-track*. Todo ello sin necesidad de completar los denominados «*directions questionnaires*» (r. 8.9(c) CPR). En la mayoría de las ocasiones, fijará una vista en la que se podrán realizar las alegaciones oportunas exclusivamente sobre los medios probatorios presentados por las partes y en la que el tribunal resolverá el asunto (PD8A, 8.1). Excepcionalmente, el tribunal podrá aceptar un «híbrido» de la *Part 8 claim*, celebrando una pequeña audiencia oral para la presentación de pruebas *orales* que resuelvan una controversia sobre los hechos (r. 8.6(2) CPR)²⁵⁸.

6. NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA Y DEL RESTO DE DOCUMENTOS

6.1. La notificación del escrito de demanda

I. En Inglaterra, históricamente, la notificación estaba considerada como una mera cuestión de procedimiento. El proceso, en *common law*, comenzaba con la notificación al demandado del escrito de demanda. De esta forma, la **jurisdicción** dependía de la práctica de la notificación del escrito de demanda²⁵⁹. En la actualidad, la Parte 6 del CPR regula el

²⁵⁸ *Adjudication Vitpol Building Service v. Michael Saman* [2008] EWHC 2283 (TCC).

²⁵⁹ HARTLEY, T. C., *International Commercial Litigation*, op. cit., pág. 77. *Vid.*, Capítulo III.

6.2. Métodos de notificación

I. El CPR regula los diferentes **métodos de notificación**. Su Regla 6.3 (1) dispone lo siguiente:

«Un escrito de demanda puede ser notificado por cualquiera de las siguientes formas:

- (a) Notificación personal, conforme a la Regla 6.5
- (b) Por correo preferente, *Document Exchange* («DX»)²⁶⁸ o cualquier tipo de notificación por el que se proceda a la entrega el día siguiente hábil, conforme a la PD 6A
- (c) Dejándolo en el lugar indicado conforme a las Reglas 6.7, 6.8, 6.9 o 6.10 [la dirección en la que el demandado pueda ser notificado]
- (d) Por fax u otros medios de comunicación electrónica conforme a la PD 6A o
- (e) Cualquier método autorizado por el tribunal, conforme a la Regla 6.15 [notificación alternativa]²⁶⁹».

II. En definitiva, lo que se pretende es practicar de forma efectiva la notificación. Así, en el caso de la **notificación personal**²⁷⁰, se entiende correctamente practicada cuando se entregan los documentos que deben notificarse al demandando o a su representación letrada. Cuando éste no presta su colaboración, es suficiente con describir la naturaleza de los documentos y dejarlos a su disposición. En el caso de tratarse de una sociedad, la notificación personal comprende aquella que se realiza a una persona cualificada dentro de la empresa, esto es, al director, tesorero, secretario, director ejecutivo, gerente, etc. En las *partnership*, cuando los socios son demandados en nombre de la sociedad, se entiende correctamente notificado si se pone a disposición del socio o de la persona que ostente el control o dirección de la sociedad la documentación pertinente en su establecimiento principal.

También se puede practicar la notificación si se realiza por **correo postal**. Conforme al CPR todos aquellos métodos de notificación postal que impliquen la notificación al día siguiente hábil están permitidos, al igual que se puede notificar entregando la documentación en la dirección del demandado o de su *solicitor*.

Por otro lado, cuando se quiera notificar **electrónicamente**, la contraparte o su *solicitor* ha tenido que indicar previamente que está conforme con recibir la documentación por este medio. Asimismo, cuando se notifique a una parte, al contrario de lo que ocurre si se notifica directamente a su *solicitor*, ésta ha tenido que indicar expresamente que acepta la notificación electrónica, sin que la inclusión de un número de fax o una dirección de correo electrónico sea suficiente.

A lo anterior cabe añadir que, si en un **contrato** aparece recogido un método de notificación en concreto, la notificación deberá regirse por lo regulado contractualmente siempre y cuando la reclamación se reduzca al referido contrato.

²⁶⁸ El *Document Exchange* (DX) es un sistema utilizado comúnmente para practicar las notificaciones. Solo sirve cuando ambas partes lo utilizan. Los documentos se notifican al día hábil siguiente.

²⁶⁹ No obstante, el demandante no puede practicar la notificación utilizando cualquiera de los métodos previstos según su libre criterio, sino que el CPR (rr.6.3 a 6.13) fija una jerarquía.

²⁷⁰ En Inglaterra, al contrario que en otros sistemas civiles, la notificación puede practicarse por el juzgado o por la propia parte interesada. En determinados procedimientos especiales, la notificación a través del juzgado no es posible. En aquellos casos en que la propia parte quiera practicar la notificación, deberá dar a conocer su intención al juzgado en el momento de presentar el escrito de demanda.

En ocasiones, no es posible practicar la notificación utilizando los métodos vistos anteriormente. En esos casos, es posible convencer al tribunal para que se utilicen **métodos de notificación alternativos**. Para que se pueda notificar utilizando estos métodos, la solicitud de notificación mediante métodos alternativos debe aportar pruebas que:

- Razonen por qué se pretende este tipo de notificación
- Determinen qué método alternativo de notificación se propone y lugar de notificación
- Explique las razones por las cuales el método de notificación alternativa puede ser efectivo.

Algunos ejemplos de este tipo de notificaciones son los anuncios en los periódicos, notificación por mensaje de texto y notificación en la dirección de la aseguradora del demandado.

Por último, es importante tener en consideración que, conforme a lo acordado por el tribunal en *Kenneth Allison c. AE Limehouse*, las partes, además de los métodos de notificación regulados en el CPR, pueden acordar otros *ad hoc*²⁷¹.

III. El CPR (r. 6.9) determina las **direcciones** donde debe practicarse la notificación, dependiendo del demandado. Para las personas físicas, por ejemplo, se notificará en su lugar de residencia habitual o último conocido; mientras que en las empresas de responsabilidad limitada se practicará la notificación en su sede o en cualquier establecimiento que tenga una conexión real con el litigio.

A tal efecto, en ocasiones, se presentan ciertas particularidades: por ejemplo, es posible que el demandado tenga varios lugares de residencia. En este sentido, la jurisprudencia ha limitado el concepto de «residencia». Así, la dirección del demandado arrendatario de una habitación es la dirección de la casa, no de la habitación²⁷². Tampoco podrá considerarse como residencia a los efectos de notificación aquella propiedad de un tercero que el demandado o sus familiares exclusivamente utilizan ocasionalmente cuando visitan Inglaterra²⁷³. Por otro lado, se entiende correctamente practicada la notificación en aquellos casos en que se realiza en la residencia habitual del demandado, aunque éste no se encuentre en el momento de practicarse la misma.

En este sentido, se puede practicar la notificación al demandado en su último lugar de residencia o establecimiento conocido, de forma que se entenderá correctamente practicada la notificación en tal lugar, sin que quepa prueba de que el demandado no ha recibido la documentación, siempre y cuando el demandante haya llevado a cabo las averiguaciones precisas para comprobar el efectivo lugar de residencia o establecimiento. Si, una vez realizadas las averiguaciones correspondientes, se descubre que el demandado reside en el extranjero, la notificación deberá practicarse conforme a las reglas que se discuten en el epígrafe que se desarrolla a continuación.

Para las sociedades y sociedades de responsabilidad limitada, en lugar de notificar en su establecimiento principal o en aquel establecimiento que tenga una conexión real con el litigio, se puede notificar en su domicilio social (s. 1139 Companies Act 2006) o en la dirección establecida por la compañía²⁷⁴. En este caso, no es suficiente con entregar la documentación al personal de seguridad o en recepción, sino cuando éste sea el método normal de notificaciones de la compañía en cuestión (Anexo 4, párrafo 8 Companies Act 2006)²⁷⁵.

²⁷¹ *Kenneth Allison Ltd c. AE Limehouse Ltd* [1992] 2 AC 105.

²⁷² *Aitman c. Adam* [2005] 1 WLR 2762.

²⁷³ *Chellaram c. Chellaram* (No 2) [2002] 3 All ER 17.

²⁷⁴ El domicilio de las sociedades se puede encontrar en: <http://www.companieshouse.gov.uk>

²⁷⁵ *Amerinda Hess c. Rome* [2000] The Times.

6.3. Notificación del resto de documentos

I. La notificación del resto de documentos se regula en la Sección III de la Parte 6 CPR. Los **métodos** de notificación son los mismos que para la demanda, a excepción de la notificación personal que sólo se utilizará si así se ha dispuesto (r. 6.20 CPR).

Generalmente, la notificación se practicará en la dirección que se haya facilitado a tales efectos. Cuando una de las partes o ambas estén representadas por un *solicitor* o un abogado parte del Espacio Económico Europeo (EEE) la dirección será la de éste último. Cualquier cambio de dirección debe notificarse al tribunal, amén de a las otras partes tan pronto como tenga lugar. Asimismo, el tribunal tiene la potestad de notificar los documentos que no comportan el escrito de demanda mediante métodos de notificación alternativos o en lugares alternativos.

II. Cuando una de las partes proceda a practicar la notificación utilizando un método incorrecto, se podrá solicitar la **subsanación** del error. En la solicitud el tribunal tendrá en consideración si el demandante ha seguido todos los pasos necesarios para remediar el error una vez ha sido detectado.

7. NOTIFICACIÓN FUERA DE LA JURISDICCIÓN

I. Originalmente, en *common law*, una acción *in personam* sólo se podía notificar dentro de la jurisdicción. Por lo tanto, un tribunal exclusivamente tendría **jurisdicción** si la demandada se notificaba dentro de la jurisdicción. Lo anterior garantizaba, en principio, que los tribunales ingleses no ejerciesen su jurisdicción de manera exorbitante sobre los demandados que no fueran susceptibles de ello²⁷⁶.

La jurisdicción del tribunal, por lo tanto, dependía de la presencia del demandado (nacional o extranjero) en suelo inglés, con independencia del tiempo que estuviera. Lo anterior podía considerarse como un débil argumento para otorgar jurisdicción a los tribunales ingleses, sin embargo, la presencia, por temporal que fuese, se consideraba una conexión del demandado con el tribunal. En cualquier caso, la naturaleza excesiva de la norma se mitigaba con la aplicación de la doctrina del *forum non conveniens* (*vid.*, Capítulo III), a tenor de la cual un tribunal puede denegar ejercer su jurisdicción cuando entienda que no *debe* conocer del caso²⁷⁷. La competencia de los tribunales quedaba supeditada a que la práctica de la notificación dentro de territorio inglés²⁷⁸, sin que la duración de su estancia fuera especialmente relevante²⁷⁹. De hecho, como concluyó el tribunal, en *Colt Industries*, la jurisdicción del tribunal se basa en el

²⁷⁶ KAY, M., *Blackstone's Civil Practice. The Commentary 2014*, op. cit., pág. 324.

²⁷⁷ HARTLEY, T. C., *International Commercial Litigation*, op. cit., pág. 78.

²⁷⁸ Si bien se puede considerar excesivo, Lord Russell of Killowen CJ [1895] determinó que:

«La competencia de un tribunal se basa en el principio de territorialidad y en que todas las personas dentro de ese territorio deben lealtad a su poder soberano y obediencia a todas sus leyes en relación a la competencia establecida legalmente de sus tribunales».

²⁷⁹ Por ejemplo, los tribunales ingleses entendieron que se había practicado correctamente una notificación a un nacional francés que estaba en Londres durante unos pocos días para asistir a las carreras de Ascot, esto es, por razones completamente inconexas con el litigio en cuestión. *Maharane of Baroda c. Wildenstein. Court of Appeal [1972] 2 QB 283*. No obstante, la presencia del demandado en la jurisdicción inglesa no puede ser consecuencia de la comisión de un fraude (*Colt Industries Inc c. Salie [1966] 1 WLR 440*).

principio de territorialidad; por lo tanto, todas las personas presentes en la jurisdicción deben fidelidad al poder soberano del Estado y obediencia a todas sus leyes²⁸⁰.

II. No obstante, la citada postura ha quedado ampliamente superada. En la actualidad, el demandante también puede notificar el escrito de demanda a un demandado que se encuentra en el extranjero (r. 6.36 CPR). En el caso de las compañías, para aplicar las reglas tradicionales del *common law* (evitando, así, el Reglamento 44/2001), deben estar presentes dentro de la jurisdicción, que no domiciliadas. Se entiende que una compañía está presente dentro de la jurisdicción si mantiene un establecimiento fijo —que no sea el de principal centro de negocio, o si lleva acabo negocios a través de agentes que tengan un establecimiento fijo en Inglaterra.

Para notificar a un demandado que se encuentre en el extranjero, esto es, fuera de la jurisdicción, es necesaria la **aprobación** del tribunal (r. 6.37(3) CPR). El tribunal no autorizará la notificación en el extranjero salvo que quede probado que (i) en efecto, los hechos y el fondo de la disputa pueden dar lugar a una demanda, y que (ii) Inglaterra sea el lugar idóneo en el que presentar la demanda, es decir, que es el *forum conveniens* o *foro natural* (r. 6.37(3) CPR). Para poder practicar la notificación es necesario el cumplimiento de ambos requisitos²⁸¹. El demandante tiene la carga de probar que los tribunales ingleses son competentes conforme a alguna de las reglas del CPR y que, en todo caso, son el foro más conveniente para resolver la disputa.

Dado que el demandado no está presente en esta fase del proceso, el demandante debe poner de relieve ante el tribunal todos los factores relevantes, incluso, aquellos que puedan perjudicarlo. En caso de no hacerlo, se puede anular la notificación en una fase posterior del procedimiento.

IV. Cuando pueda proceder a practicarse efectivamente la notificación en el extranjero, se deberá realizar en el transcurso de los seis meses previstos en el CPR (r. 7.5 CPR)²⁸² y conforme a la normativa del país donde se quiere notificar (r. 6.40 CPR)²⁸³.

²⁸⁰ *Colt Industries Inc c. Salie [1966] 1 WLR 440*.

²⁸¹ *Seaconar Far East Ltd c. Bank Markazi Jomhouri Islami Iran [1994] 1 AC 438*. En idéntico sentido, *AK Investment CJSC c. Kyrgyz Mobil Tel Ltd [2011] UKPC 7*.

²⁸² El plazo de seis meses es independiente de la obtención de la aprobación del tribunal. Asimismo, el plazo de seis meses resulta aplicable cuando efectivamente se practique la notificación en el extranjero. Así lo ratifica el juez, en *Peyadi c. Armistel Shipping Corporation [1992] QB 907*, donde se notificó a un extranjero.

²⁸³ En el caso de notificar a un demandado que se encuentre en el Estado miembro, será de aplicación el Reglamento CE No 1393/2007, de 13 de noviembre de 2007 relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documento judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos»).

CAPÍTULO VII

LA GESTIÓN DEL PROCESO: LAS VÍAS PROCESALES

1. EL PROCESO DE ASIGNACIÓN A UNA VÍA PROCESAL

I. Conforme al *overriding objective*, una de las funciones más importantes del juez es la **gestión eficiente del proceso**, considerada como uno de los aspectos esenciales del CPR. Con ello se pretende que las partes y su representación letrada traten de litigar una controversia en un contexto regulado por el tribunal, de manera que sea éste quien controle el desarrollo del litigio, en aras a la mejor administración de la justicia. Serán competentes los jueces encargados del procedimiento, esto es, los *district judges*, *masters* y *circuit judges*. La gestión del tribunal está regulada en la Parte 3 y las Partes 26 a 29 CPR, junto con las Practice Directions que les acompañan. Así, el tribunal está facultado para participar de forma activa en la gestión del proceso a través de órdenes judiciales por las que proporciona directrices a las partes sobre qué hacer y el plazo previsto para ello.

La gestión podrá ejercitarse en cualquier etapa durante la pendencia del proceso, en especial, en el momento de la asignación del asunto a la vía procesal («*track*») correspondiente y en las vistas que el tribunal decida fijar en relación a la gestión del asunto, denominadas *Case Management Conferences*. Entre las funciones de control y gestión del tribunal se encuentra: la temprana identificación de los asuntos litigiosos, dar instrucciones para asegurar que el caso progresa de manera adecuada, fijar fechas y un calendario de actuaciones y el control de las costas. Así, el proceso de asignación a una vía procesal es una de las partes más importantes de esa gestión (r. 1.1(2) CPR). En suma, son tres las vías procesales que pueden ser asignadas por el tribunal: la de escasa cuantía («*small track*»), la rápida («*fast track*») o la múltiple («*multi-track*»).

II. Para ayudar al tribunal a asignar el caso a la vía procesal más adecuada, el juez encargado del proceso³⁰⁸, presentados los escritos de contestación, solicitará a las partes que comple-

³⁰⁸ En algunas de las Salas del *High Court* (*Chancery* y *Queen's Bench*), los casos se asignan a un *master*, aunque, en ocasiones, las vistas podrán atenderlas otros *masters*, según las circunstancias. De esta forma, como hemos visto en el Capítulo I, un juez no tiene porqué conocer de todo el proceso. Por el contrario, a partir de 2013, en virtud de la *Jackson Reforms*, a través del sistema denominado «*docketing*», se podrá asignar a un único juez la gestión y el conocimiento de todo el proceso. Este proceso de asignación, en términos generales, se reduce a aquellos procesos complejos asignados a la vía múltiple («*multi-track*»).

menten el denominado cuestionario de instrucciones o *directions questionnaire*³⁰⁹ y las partes deberán consultarse mutuamente y cooperar entre ellas³¹⁰. El *directions questionnaire* deberá ser presentado, pagando una tasa, en la fecha prevista en la propia notificación³¹¹. Un ejemplo de *directions questionnaire* es el formulario N81, utilizado en las *fast* y *multi track*.

Directions questionnaire
(Fast track and Multi-track)

To be completed by, or on behalf of,

who is [] [Claimant/Defendant/Part 20 claimant] in this claim

In the Claim No.

You should note the date by which this questionnaire must be returned and the name of the court it should be returned to since this may be different from the court where the proceedings were issued.

If you have settled this claim (or if you settle it on a future date) and do not need to have it heard or tried, you must let the court know immediately.

If the claim is not settled, a Judge will allocate it to an appropriate case management track. To help the Judge choose the most just and cost-effective track, you must now complete the directions questionnaire.

You should write the claim number on any other documents you send with your directions questionnaire. Please ensure they are firmly attached to it.

A Settlement

Under the Civil Procedure Rules parties should make every effort to settle their case before the hearing. This could be by discussion or negotiation (such as a roundtable meeting or settlement conference) or by a more formal process such as mediation. The court will want to know what steps have been taken. Settling the case early can save costs, including court hearing fees.

For legal representatives only

I confirm that I have explained to my client the need to try to settle; the options available; and the possibility of costs sanctions if they refuse to try to settle.

☐ I confirm

For all

Your answers to these questions may be considered by the court when it deals with the questions of costs: see Civil Procedure Rules Part 44.

- Given that the rules require you to try to settle the claim before the hearing, do you want to attempt to settle at this stage?
☐ Yes ☐ No
- If Yes, do you want a one month stay?
☐ Yes ☐ No
- If you answered 'No' to question 1, please state below the reasons why you consider it inappropriate to try to settle the claim at this stage.

Reasons:

N81 Directions questionnaire (Fast track and Multi-track) (04/14)

1

© Crown Copyright 2014. Reproduced by Thomson Reuters (Professional) UK Ltd.

N181_0414.indd 1

27/03/2014 10:10

³⁰⁹ Definido como un modelo exhaustivo que requiere información detallada sobre el caso. GERLIS, S.M. & BLACKFORD, R., *The Civil Practitioner's Handbook 2002/2003*, Sweet & Maxwell Ltd, 2002, pág. 127.

³¹⁰ En aquellos procedimientos que se dirijan directamente a una vía procesal determinada no será necesario utilizar el citado documento. Ejemplo de lo anterior, las *Part 8 claims*, que comienzan directamente en la vía múltiple.

³¹¹ Al menos 14 días desde la notificación en la vía de escasa cuantía («*small tracks*») y 28 para la vía rápida («*fast tracks*») y la vía múltiple («*multiple tracks*»). Las partes no podrán acordar modificar la fecha en la que se debe presentar.

B Court

Notes

High Court cases are usually heard at the Royal Courts of Justice or certain Civil Trial Centres. Fast or multi-track trials may be dealt with at a Civil Trial Centre or at the court where the claim is proceeding.

B1. (High Court only)

The claim has been issued in the High Court. Do you consider it should remain there?

☐ Yes ☐ No

If Yes, in which Division/List?

If No, in which County Court hearing centre would you prefer the case to be heard?

B2. Trial (all cases)

Is there any reason why your claim needs to be heard at a court or hearing centre?

☐ Yes ☐ No

If Yes, say which court and why?

C Pre-action protocols

You are expected to comply fully with the relevant pre-action protocol.

Have you done so?

☐ Yes ☐ No

If you have not complied, or have only partially complied, please explain why.

Before any claim is started, the court expects you to have complied with the relevant pre-action protocol, and to have exchanged information and documents relevant to the claim to assist in settling it. To find out which protocol is relevant to your claim see: www.justice.gov.uk/guidance/courts-and-tribunals/courts/procedure-rules/civil/menu/protocol.htm

D Case management information

D1. Applications

Have you made any application(s) in this claim?

☐ Yes ☐ No

If Yes, what for? (e.g. summary judgment, add another party).

D1. Applications

It is important for the court to know if you have already made any applications in the claim (or are about to issue one), what they are for and when they will be heard. The outcome of the applications may affect the case management directions the court gives.

D2. Track

If you have indicated in the proposed directions a track attached which would not be the normal track for the claim, please give brief reasons below for your choice.

For hearing on

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

D2. Track

The basic guide by which claims are normally allocated to a track is the amount in dispute, although other factors such as the complexity of the case will also be considered. Leaflet *EX05 – The Fast Track and the Multi-track*, explains this in greater detail.

D Case management information (continued)

Notes

D3. Disclosure of electronic documents (multi-track cases only)

If you are proposing that the claim be allocated to the multi-track:

1. Have you reached agreement, either using the Electronic Documents Questionnaire in Practice Direction 31B or other wise, about the scope and extent of disclosure of electronic documents on each side?

☐ Yes ☐ No
2. If No, is such agreement likely?

☐ Yes ☐ No
3. If there is no agreement and no agreement is likely, what are the issues about disclosure of electronic documents which the court needs to address, and should they be dealt with at the Case Management Conference or at a separate hearing?

D4. Disclosure of non-electronic documents (all cases)

What directions are proposed for disclosure?

For all multi-track cases, except personal injury.

Have you filed and served a disclosure report (Form N263) (see Civil Procedure Rules Part 31)?

☐ Yes ☐ No

Have you agreed a proposal in relation to disclosure that meets the overriding objective?

☐ Yes ☐ No

If Yes, please ensure this is contained within the proposed directions attached and specify the draft order number.

E Experts

Do you wish to use expert evidence at the trial or final hearing?

☐ Yes ☐ No

Have you already copied any experts' reports to the other party(ies)?

☐ None yet obtained ☐ Yes ☐ No

Do you consider the case suitable for a single joint expert in any field?

☐ Yes ☐ No

There is no presumption that expert evidence is necessary, or that each party will be entitled to their own expert(s). Therefore, the court requires a short explanation of your proposals with regard to expert evidence.

F Experts (continued)

Notes

Please list any single joint experts you propose to use and any other experts you wish to rely on. Identify single joint experts with the initials 'SJ' after their name(s). Please provide justification of your proposal and an estimate of costs.

Experts' name	Field of expertise (e.g. orthopaedic surgeon, surveyor, engineer)	Justification for expert and estimate of costs

F Witnesses

Which witnesses of fact do you intend to call at the trial or final hearing including, if appropriate, yourself?

Witness name	Witness to which facts

G Trial or Final Hearing

How long do you estimate the trial or final hearing will take?

☐ less than one day

☐ one day

☐ more than one day

☐ his

State number of days

Are there any days within the next 12 months when you, an expert or an essential witness will not be able to attend court for trial or final hearing?

You should only enter those dates when you, your expert(s) or essential witnesses will not be available to attend court because of holiday or other commitments.

Name	Dates not available

You should notify the court immediately if any of these dates change.

HCosts

Do not complete this section if:

- 1) you do not have a legal representative acting for you
- 2) the case is subject to fixed costs

If your claim is likely to be allocated to the Multi-Track form Precedent H must be filed at in accordance with CPR 3.13.

☐ I confirm Precedent H is attached.

Other information

Do you intend to make any applications in the future?

If Yes, what for?

In the space below, set out any other information you consider will help the judge to manage the claim.

1. *Species*: *Salmonella enteritidis*
 2. *Strain*: *157H*
 3. *Source*: *Ground beef*
 4. *Isolation date*: *1998-08-15*
 5. *Isolation site*: *USDA*
 6. *Isolation method*: *Standard*
 7. *Isolation medium*: *Agar*
 8. *Isolation temperature*: *37°C*
 9. *Isolation time*: *24h*
 10. *Isolation result*: *Positive*
 11. *Isolation comments*: *See report*
 12. *Isolation reference*: *See report*
 13. *Isolation notes*: *See report*
 14. *Isolation status*: *Active*
 15. *Isolation version*: *1.0*
 16. *Isolation user*: *John Doe*
 17. *Isolation date*: *1998-08-15*
 18. *Isolation site*: *USDA*
 19. *Isolation method*: *Standard*
 20. *Isolation medium*: *Agar*
 21. *Isolation temperature*: *37°C*
 22. *Isolation time*: *24h*
 23. *Isolation result*: *Positive*
 24. *Isolation comments*: *See report*
 25. *Isolation reference*: *See report*
 26. *Isolation notes*: *See report*
 27. *Isolation status*: *Active*
 28. *Isolation version*: *1.0*
 29. *Isolation user*: *John Doe*
 30. *Isolation date*: *1998-08-15*
 31. *Isolation site*: *USDA*
 32. *Isolation method*: *Standard*
 33. *Isolation medium*: *Agar*
 34. *Isolation temperature*: *37°C*
 35. *Isolation time*: *24h*
 36. *Isolation result*: *Positive*
 37. *Isolation comments*: *See report*
 38. *Isolation reference*: *See report*
 39. *Isolation notes*: *See report*
 40. *Isolation status*: *Active*
 41. *Isolation version*: *1.0*
 42. *Isolation user*: *John Doe*
 43. *Isolation date*: *1998-08-15*
 44. *Isolation site*: *USDA*
 45. *Isolation method*: *Standard*
 46. *Isolation medium*: *Agar*
 47. *Isolation temperature*: *37°C*
 48. *Isolation time*: *24h*
 49. *Isolation result*: *Positive*
 50. *Isolation comments*: *See report*
 51. *Isolation reference*: *See report*
 52. *Isolation notes*: *See report*
 53. *Isolation status*: *Active*
 54. *Isolation version*: *1.0*
 55. *Isolation user*: *John Doe*
 56. *Isolation date*: *1998-08-15*
 57. *Isolation site*: *USDA*
 58. *Isolation method*: *Standard*
 59. *Isolation medium*: *Agar*
 60. *Isolation temperature*: *37°C*
 61. *Isolation time*: *24h*
 62. *Isolation result*: *Positive*
 63. *Isolation comments*: *See report*
 64. *Isolation reference*: *See report*
 65. *Isolation notes*: *See report*
 66. *Isolation status*: *Active*
 67. *Isolation version*: *1.0*
 68. *Isolation user*: *John Doe*
 69. *Isolation date*: *1998-08-15*
 70. *Isolation site*: *USDA*
 71. *Isolation method*: *Standard*
 72. *Isolation medium*: *Agar*
 73. *Isolation temperature*: *37°C*
 74. *Isolation time*: *24h*
 75. *Isolation result*: *Positive*
 76. *Isolation comments*: *See report*
 77. *Isolation reference*: *See report*
 78. *Isolation notes*: *See report*
 79. *Isolation status*: *Active*
 80. *Isolation version*: *1.0*
 81. *Isolation user*: *John Doe*
 82. *Isolation date*: *1998-08-15*
 83. *Isolation site*: *USDA*
 84. *Isolation method*: *Standard*
 85. *Isolation medium*: *Agar*
 86. *Isolation temperature*: *37°C*
 87. *Isolation time*: *24h*
 88. *Isolation result*: *Positive*
 89. *Isolation comments*: *See report*
 90. *Isolation reference*: *See report*
 91. *Isolation notes*: *See report*
 92. *Isolation status*: *Active*
 93. *Isolation version*: *1.0*
 94. *Isolation user*: *John Doe*
 95. *Isolation date*: *1998-08-15*
 96. *Isolation site*: *USDA*
 97. *Isolation method*: *Standard*
 98. *Isolation medium*: *Agar*
 99. *Isolation temperature*: *37°C*
 100. *Isolation time*: *24h*
 101. *Isolation result*: *Positive*
 102. *Isolation comments*: *See report*
 103. *Isolation reference*: *See report*
 104. *Isolation notes*: *See report*
 105. *Isolation status*: *Active*
 106. *Isolation version*: *1.0*
 107. *Isolation user*: *John Doe*
 108. *Isolation date*: *1998-08-15*
 109. *Isolation site*: *USDA*
 110. *Isolation method*: *Standard*
 111. *Isolation medium*: *Agar*
 112. *Isolation temperature*: *37°C*
 113. *Isolation time*: *24h*
 114. *Isolation result*: *Positive*
 115. *Isolation comments*: *See report*
 116. *Isolation reference*: *See report*
 117. *Isolation notes*: *See report*
 118. *Isolation status*: *Active*
 119. *Isolation version*: *1.0*
 120. *Isolation user*: *John Doe*
 121. *Isolation date*: *1998-08-15*
 122. *Isolation site*: *USDA*
 123. *Isolation method*: *Standard*
 124. *Isolation medium*: *Agar*
 125. *Isolation temperature*: *37°C*
 126. *Isolation time*: *24h*
 127. *Isolation result*: *Positive*
 128. *Isolation comments*: *See report*
 129. *Isolation reference*: *See report*
 130. *Isolation notes*: *See report*
 131. *Isolation status*: *Active*
 132. *Isolation version*: *1.0*
 133. *Isolation user*: *John Doe*
 134. *Isolation date*: *1998-08-15*
 135. *Isolation site*: *USDA*
 136. *Isolation method*: *Standard*
 137. *Isolation medium*: *Agar*
 138. *Isolation temperature*: *37°C*
 139. *Isolation time*: *24h*
 140. *Isolation result*: *Positive*
 141. *Isolation comments*: *See report*
 142. *Isolation reference*: *See report*
 143. *Isolation notes*: *See report*
 144. *Isolation status*: *Active*
 145. *Isolation version*: *1.0*
 146. *Isolation user*: *John Doe*
 147. *Isolation date*: *1998-08-15*
 148. *Isolation site*: *USDA*
 149. *Isolation method*: *Standard*
 150. *Isolation medium*: *Agar*
 151. *Isolation temperature*: *37°C*
 152. *Isolation time*: *24h*
 153. *Isolation result*: *Positive*
 154. *Isolation comments*: *See report*
 155. *Isolation reference*: *See report*
 156. *Isolation notes*: *See report*
 157. *Isolation status*: *Active*
 158. *Isolation version*: *1.0*

5

Directions

You must attempt to agree proposed directions with all other parties. Whether agreed or not a draft of the order for directions which you seek must accompany this form.

All proposed directions for multi-track cases must be based on the directions at www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil

All proposed directions for fast track cases must be based on CPR Part 28.

Signature

Date _____

[Legal Representative for the][1st][2nd][3rd]
[Claimant][Defendant][Part 20 claimant]

Please enter your name, reference number and full postal address including details of telephone, DX, fax or e-mail

044 01 E-mail _____	If applicable									
	Telephone no.									
	Fax no.									
	DX no.									
	Your ref.									
Postcode										

E-mail										

En caso de no presentar el cuestionario, el tribunal ordenará a la parte incumplidora que presente el escrito en los 7 días siguientes desde la notificación de la referida orden. De no cumplir con el mandato judicial, la demanda, contestación o demanda reconvenional se entenderá no presentada (PD 26, 2.5(2)).

Una vez propuestos los *directions questionnaire*, o cuando haya transcurrido el plazo concedido a tal efecto (r. 26.5(1) CPR), el tribunal procederá, en aplicación del *overriding objective*, a la asignación provisional del caso a una vía procesal determinada³¹², notificando a las partes su decisión. Asimismo, el tribunal podrá acordar la celebración de una vista cuando lo considere necesario. No obstante lo anterior, antes de decidir cuál es la vía procesal, el tribunal podrá acordar la celebración de una vista, con el afán de elegir la más conveniente al caso en particular (r. 26.5(4) CPR), aunque no es la práctica habitual.

III. La **decisión del tribunal** dependerá de las circunstancias del caso en concreto. Los principales factores que el tribunal tendrá en consideración para tomar una decisión final son eminentemente financieros, esto es, la cuantía de la demanda, pudiendo asignar el

312 Conforme al CPR, las decisiones a este respecto las puede realizar cualquier funcionario judicial (por ejemplo, *district judges* o *masters*). Sin embargo, en la vía procesal múltiple o *multi-track*, los *masters* serán los encargados cuando el litigio se conozca en el RCJ, los *district judges* en los asuntos ante el registro del distrito correspondiente y tanto un *district judge* como un *circuit judge* en los casos que se resuelvan ante el *County Court*.

caso a una de las tres vías procesales posibles. En las demandas de cuantía indeterminada, se le asignará, discrecionalmente, la vía procesal que más le convenga para poder ser juzgada justamente, teniendo en consideración diversos factores³¹³. El tribunal, además, de la cuantía de la demanda podrá tener en consideración otros factores para decidir, discrecionalmente, cuál es la vía procesal idónea, como: la complejidad de los hechos, fundamentos jurídicos o de la práctica de los medios probatorios, el número de partes, la naturaleza de la medida judicial solicitada, etc. En las demandas de cuantía indeterminada, será decisión del juez, conforme a las características del caso concreto, asignar el caso a una vía en particular (r. 26.8 CPR). Una vez analizadas todas estas circunstancias, el tribunal procederá a asignar una vía procesal, notificándose a las partes.

IV. Sin embargo, la decisión del tribunal puede no ser definitiva, de manera que un asunto puede ser **reasignado** a otra vía procesal. Así, cuando una de las partes no esté de acuerdo con la decisión del tribunal, podrá impugnarla bien recurriendo al tribunal superior o bien presentando una solicitud ante el mismo juez para que cambie de opinión. La solicitud deberá realizarse en aquellas ocasiones en que no ha tenido lugar una vista. En caso contrario, la vía adecuada es la apelación (PD 26 para.11.1 y 11.2).

En ocasiones, la modificación de algunas de las características relevantes del proceso provoca su reasignación, que podrá realizarse por propia iniciativa del tribunal o a instancia de una de las partes. Por ejemplo, es cuando la cuantía de la demanda se ve incrementada, hasta superar los límites previstos para una determinada vía procesal.

2. LOS TIPOS DE VÍAS PROCESALES

I. Como ha quedado apuntado, son tres las vías procesales que pueden ser asignadas por el tribunal: la de escasa cuantía («*small track*»), la rápida («*fast track*») o la múltiple («*multi-track*»). El caso se asignará a la vía procesal correspondiente dependiendo de la cuantía de la reclamación y de otros factores en relación al fondo del asunto³¹⁴. En el caso de las demandas por cuantía indeterminada, el juez tiene la discreción para decidir qué vía es la más conveniente.

La **función** principal de este proceso de asignación a diferentes vías procesales es que el tribunal dedique los recursos necesarios al asunto dependiendo de su naturaleza y necesidades.

II. En primer lugar, la vía de escasa cuantía o «*small track*» (regulada en la Parte 27 CPR), facilita un procedimiento determinado para cierto tipo de reclamaciones que no excedan de 10.000 libras esterlinas³¹⁵. Igualmente, cuando el valor de la reclamación supere el citado importe, las partes podrán acordar que, no obstante lo anterior, el asunto comience en la *small track* (r. 26.7(3) CPR). Sin embargo, el tribunal podrá decidir en sentido contrario, de considerar que el asunto no se puede resolver de manera adecuada en esa vía (PD 26, 8.1 (2)(b)). Por ende, para modificar la vía procesal originariamente asignada deberá existir un consenso entre las partes y entre éstas y el tribunal.

El objetivo de esta vía procesal es la resolución de conflictos evitando el desembolso de grandes cuantías. En efecto, en aras a limitar el coste del procedimiento no solo no podrán asignarse a esta vía procesal todos los procedimientos, sino que se priva a las partes de ciertas herramientas (r. 27.2 CPR), como, por ejemplo, las pruebas periciales (r. 27.6 CPR)³¹⁶.

El límite de 10.000 libras esterlinas no es absoluto y, en ciertas ocasiones, algunos procedimientos comenzarán en otra vía procesal, incluso si su cuantía es inferior al citado límite, bien porque así ha sido previsto en el CPR (rr. 26 y 27 CPR y PD 26) o porque la complejidad de la materia lo requiere³¹⁷. Salvo acuerdo expreso de las partes en contrario³¹⁸, la decisión final se tomará en una vista final («*final hearing*»), que generalmente tendrá lugar ante un *district judge* y en el despacho del propio juez, si bien también se podrá celebrar en Sala (PD 27, 4.2). Por último, en esta vía procesal no es necesaria la representación letrada, aunque nada obsta a que las partes acudan representadas por abogado, si bien la condena en costas (en caso de que la hubiera) no suele incluir los costes de esta representación.

II. En segundo lugar, en los casos cuya cuantía versa entre 10.000 y 25.000 libras esterlinas, el asunto se asignará a la vía rápida o «*fast track*» (r. 26.4 CPR), regulada principalmente en la Parte 28 CPR. Los casos susceptibles de asignación a esta vía procesal son aquellos en que se prevea que el juicio no durará más de un día³¹⁹, siempre y cuando, en caso de que sea necesarios, no haya más de dos expertos o peritos por materia, uno por cada parte (r. 26.5 CPR). De asignar el asunto a esta vía procesal, el juez emitirá unas directrices para la gestión del procedimiento, por ejemplo, en relación a la declaración de los testigos, la revelación («*disclosure*») de documentos o las pruebas periciales (r. 28.2 CPR).

Para una gestión efectiva del procedimiento, el juez enviará a las partes el formulario N170, en el que se incluye una lista de control o «*pre-trial checklist*» que, salvo dispensa del juez, deberán completar y entregar al tribunal en el plazo en ella especificado (r. 28.5 CPR). La finalidad de la referida lista de control es proveer al juez de la suficiente información para que pueda fijar la fecha del juicio (que en general tendrá lugar ante un *district o circuit judge*), que pueda fijar las partes y determinar los pasos a seguir. En caso de que las partes no cumplieran las directrices a las partes y determinar los pasos a seguir. En caso de que las partes no cumplieran el *pre-trial checklist*, el juez dictará una orden compeliendo a la parte incumplidora. De no cumplir el requerimiento del tribunal, éste podrá archivar el procedimiento.

Como se puede comprobar, en el ejemplo del N170, las partes proporcionan la información necesaria al juez para que éste pueda decidir sobre el proceso a seguir. Asimismo, realizan observaciones sobre las directrices proporcionadas hasta la fecha por este último y anuncian los diferentes medios de prueba que pretenden utilizar. Todo ello para que juez pueda fijar una fecha para el juicio y decidir cómo se llevará a cabo el enjuiciamiento del asunto. Igualmente, el juez de oficio podrá programar una vista adicional para confirmar la fecha del juicio y proveer directrices adicionales a las partes.

³¹⁶ Si una de las partes considera esencial un dictamen pericial, deberá señalarlo, expresamente, en el *directions questionnaire* y solicitar la autorización del tribunal.

³¹⁷ En los supuestos en los que se utilicen pruebas periciales o cuando la vista dure más de un día.

³¹⁸ El acuerdo expreso es determinante, dado que de otra forma vulneraría el art. 6 (1) de la Convención Europea de Derechos Humanos. *Simi, S., A practical Approach to Civil Procedure, op. cit.*, pág. 302.

³¹⁹ Si bien no es decisivo, en la mayoría de los casos que se prevea que durará más de un día se destinarán a la vía múltiple.

³¹³ La naturaleza de la tutela que se solicita, la complejidad de los hechos, los fundamentos o las pruebas, la cantidad de prueba oral, o el valor de la demanda reconventional son algunos ejemplos.

³¹⁴ El tribunal, cuando piense que la cuantía de una demanda resulta irreal, podrá pedir a las partes que la justifiquen (r. 26.5(3) CPR).

³¹⁵ Ejemplo de ello son las lesiones personales cuando la cuantía de la demanda supera las 1.000 libras esterlinas.

